

Norberto Galasso

**"De Alfonsín a Menem y De La Rúa
(1983-2001)"**

© 2005, Centro Cultural
"Enrique Santos Discépolo"



Cuadernos para la Otra Historia
© Centro Cultural "Enrique S. Discépolo"
Buenos Aires, Argentina
www.discepolo.org.ar

DE ALFONSÍN A MENEM Y DE LA RÚA (1983-2001)

La presidencia de Raúl Alfonsín (1983-89)

¿Con la democracia se come, se educa y se cura?

A partir del 10 de diciembre de 1983, Alfonsín conduce a la Argentina con el siguiente gabinete:

Interior:	Antonio Tróccoli
Economía:	Bernardo Grinspun
Educación y Justicia:	Carlos Alconada Aramburú
Obras Públicas:	Roque Carranza
Relaciones Exteriores y Culto:	Dante Caputo
Defensa:	Raúl Borrás
Salud y Acción Social:	Carlos Neri
Trabajo y Seguridad Social:	Antonio Mucci

A cargo de las Secretarías, se encuentran: Conrado Storani, en Energía, Juan Vital Sorrouille, en Planificación (más tarde, ministro de Economía, reemplazando a Grinspun), Enrique de Vedia, en Desarrollo Humano y Familia, Oscar Campero, en Comercio, Manuel Sadovsky en Ciencia y Técnica y Carlos Gorostiza, en Cultura. La designación como Secretario General de la Presidencia recae en Germán López.

Durante la campaña electoral, Alfonsín ha convocado a la unión nacional y a la restauración de la democracia, con la cual -decía- “se come, se educa y se cura”. En su programa electoral había prometido “levantar la cortina de todas las fábricas”, enjuiciar a los responsables de la siniestra represión ejercida durante la dictadura “procesista”, establecer plenamente el Estado de Derecho y en materia de deuda externa, diferenciar la legítima de la ilegítima, pagando solamente la primera de ellas. Para una sociedad profundamente lastimada y aterrorizada por tanta represión y tanta sangre, estos planteos podían constituir



la base de un posible “tercer movimiento histórico”, que se abriría paso entre los dos grandes movimientos políticos en declinación, radicalismo y peronismo.

Sin embargo, el proyecto suponía contar con la fuerza social suficiente como para doblegar a los protagonistas del pasado inmediato: 1) poderosos consorcios industriales y financieros que se habían consolidado en el período anterior, 2) Fuerzas Armadas responsables del genocidio y 3) acreedores externos, con sus intereses regentados por el Fondo Monetario Internacional. Tal era el desafío de la Historia.

Con amplio apoyo de sectores medios y una dirigencia juvenil que sostenía la necesidad de quebrar la dependencia (“la Coordinadora”), el presidente Alfonsín inicia su gestión el 10 de diciembre de 1983.

Una de sus primeras medidas se dirige a cumplimentar el reclamo de las Madres de Plaza de Mayo y otros organismos de Derechos Humanos: la investigación de torturas y muertes producidas durante la dictadura militar. Para ello, el 15 de diciembre de 1983 se crea la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) integrada, entre otros, por el obispo Jaime de Neves y el escritor Ernesto Sábato. Los periódicos de esa época dan cuenta de los operativos dirigidos a descubrir los asesinatos de la dictadura. Se exhuman cadáveres sepultados como “N.N.” por el terrorismo de Estado. Se detectan lugares que funcionaron como “campos de concentración”. Se toman denuncias de desaparecidos e información proveniente de distintos organismos de Derechos Humanos. El 20 de setiembre de 1984, la CONADEP entrega su informe al Presidente de la Nación, con el apoyo de más 70.000 manifestantes en Plaza de Mayo. En dicho documento, se denuncia que durante la dictadura funcionaron 340 centros de detención y que se han podido registrar, hasta esa fecha, 8.961 personas detenidas-desaparecidas. Los organismos de Derechos Humanos estiman que la cifra asciende a 30.000.

Resta, entonces, cumplir el otro mandato: el castigo a los culpables. El gobierno adopta, en este caso, una actitud de espera. Pero, cuando- a un año y cuatro meses de haberse retornado al juego de la democracia formal- el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no ha tomado ninguna medida para enjuiciar a los responsables de la represión, decide actuar. Así, en abril de 1985, inicia el juicio por los crímenes del “proceso” y la Cámara en lo Criminal y Correccional ordena el procesamiento de los jefes Jorge R. Videla, Emilio E. Massera y Orlando Agosti. Poco después, el 22 de abril se celebra la primera sesión de la audiencia oral y pública contra los ex comandantes. El 23, se realiza una multitudinaria manifestación a favor del juicio, impulsada por las organizaciones de Derechos Humanos. El Juicio a las Juntas conmueve al país y llama la atención en el exterior, pues en otros países, al regresar a la democracia formal, se ha preferido conciliar con los mandos militares. El 9 de diciembre de 1985, la Justicia condena a los jefes militares aplicando diversas sanciones, que van desde la reclusión perpetua hasta un cierto número de



años de detención, acompañados de “inhabilitación absoluta perpetua” en razón de los delitos de “homicidios, tormentos y privaciones ilegales de la libertad”. Sólo queda por definir la responsabilidad del resto de los militares implicados en muertes y torturas, a partir de esa jerarquía y hasta los grados inferiores de las Fuerzas.

En esa primera época de su gobierno, Alfonsín aborda, también, la cuestión sindical. Aquí influye tanto la vinculación establecida por algunos gremialistas con los generales del “proceso” -y que el mismo Alfonsín denunció, en 1983, como ‘pacto sindical militar’- como también la desconfianza tradicional del radicalismo respecto al gremialismo y su protagonismo político. A tal fin, el ministro de Trabajo y Seguridad Social -Antonio Mucci- envía un proyecto al Congreso, en marzo de 1984, que elimina la CGT única y el sindicato único, instituye la participación de las minorías en la conducción de los gremios y prohíbe la reelección de los dirigentes, entre otras medidas llamadas de “reordenamiento sindical”. Aprobado por la Cámara de Diputados -donde el radicalismo posee mayoría- el proyecto es rechazado por el Senado, al pronunciarse negativamente el bloque justicialista con la ayuda de los votos de los dos senadores neuquinos que responden al caudillo provincial Sapag. Ello provoca la renuncia de Mucci y poco después, del otro propiciador de la ley, el secretario general de la presidencia, Germán López. Este suceso prueba el poder de los sindicatos, que se habrían de convertir en la principal oposición al gobierno, mientras la dirigencia política del peronismo, en grave declinación, se alinea entre un aparato ‘pesado’ con perfil de derecha (Herminio Iglesias), por un lado y por otro, sectores democráticos -algunos con desviaciones liberales- que integran la llamada “Renovación”.

También se dirime en ese año 84, el proyecto de acuerdo con Chile respecto al canal de Beagle, que viene a resolver un conflicto que ha conducido -en la época de la dictadura- a un paso de la guerra. El gobierno propicia el entendimiento mientras el peronismo, especialmente sus sectores nacionalistas -con excepción de José María Rosa y unos pocos más- lo impugnan severamente. El debate llega a la pantalla televisiva a través de la polémica Caputo - Saadi. El Partido Justicialista se pronuncia por la abstención. El 25 de noviembre de 1984, las urnas se expresan: el 81% vota por el sí (ratificación del acuerdo), el 17% vota negativamente. Poco después, el 29 de noviembre se firma el acuerdo.

La política económica

Con respecto a la reactivación de la industria, el Presidente confía concretarla a través de la gestión de Bernardo Grinspun, su ministro de Economía, a quien puede considerársele expresión de la pequeña y mediana industria, crítico del neoliberalismo y por tanto, inclinado hacia la protección de los intereses



nacionales. Grinspun intenta concretar una política económica dirigida hacia la ampliación del mercado interno y la reducción de las rentas financieras, pero encuentra enormes obstáculos. Sus relaciones con los emisarios del F.M.I. resultan conflictivas dado su intento de resguardar la autonomía de la Argentina. Más de una vez, el ministro se opone a las imposiciones del organismo internacional, así como denuncia los altos intereses que se aplican sobre nuestra deuda externa. En esta porfía, Grinspun no vacila en llegar a exaltadas discusiones -inclusive a pleno insulto- con Joaquín Ferrán, representante del FMI.

Respecto a la deuda externa, el gobierno decide una moratoria unilateral hasta junio de 1984 (seis meses), argumentando que necesita conocer en profundidad la verdadera situación económica y financiera de la Argentina, así como también analizar la naturaleza de la deuda. A su vez, los legisladores investigan, asumiendo el derecho que la Constitución otorga al Congreso Nacional en materia de deuda externa. Así, el 5 de setiembre de 1984, una comisión parlamentaria allana el 8vo. piso de Lavalle 1171 -estudio de los doctores Klein y Mairal- incautándose de valiosa documentación. Algunas carpetas con información comprometedoras son salvadas del allanamiento por dos jóvenes abogados del estudio: el hijo de Mariano Grondona y el hijo de Martínez de Hoz, quienes depositan dos valijas con ese material en casa de unos familiares del segundo, pero finalmente la comisión encuentra la pista y logra recuperar también ese material.

Alejandro Olmos señala que se hallaron en dicho estudio “doscientas carpetas que revelan de manera inequívoca todos los hilos de la conspiración económica que pasaban por las manos del secretario de Estado, Dr. Klein, cientos de telex intercambiados entre el estudio y los bancos acreedores estableciendo las condiciones de los préstamos, asesoramiento del estudio a bancos extranjeros, dictámenes, etc.”¹

De este modo, el gobierno radical se encuentra ante una gran oportunidad, pues después de siete años de dictadura genocida en los cuales el país ha sextuplicado su deuda externa -sin intervención del Congreso pues estaba clausurado- podría denunciarse su carácter ilegítimo. El Congreso Nacional recuperaría así su función de contralor de la deuda, tomando a su cargo el análisis de la documentación obtenida en el allanamiento. Pero, después de diversas dilaciones que concluyen por empantanar el funcionamiento de la comisión investigadora, varios legisladores radicales le confiesan a Olmos, que “la investigación de la deuda resulta incompatible con la estrategia económica del gobierno de Alfonsín.”²

¹ Olmos, Alejandro. *Todo lo que usted quiso saber sobre la Deuda Externa y siempre se lo ocultaron*, Editorial de los Argentinos, Buenos aires, 1989, pp. 80/81

² Olmos, Alejandro. ob. cit. p. 82



A su vez, a lo largo de 1984, el proyecto de reactivar la economía basándose en un aumento del consumo, recibe críticas desde diversos sectores. Grinspun ya se ha convertido en personaje molesto para los poderosos grupos financieros internos y externos. La confluencia de ambos sectores arrecia contra él y finalmente lo obliga a Alfonsín a modificar el curso de su política económica. En diciembre de 1984, el Presidente declara “que la expansión de la economía por vía del consumo tiene ‘patas cortas’ y que la estrategia adecuada para romper el aislamiento de la Argentina consiste en fomentar las exportaciones y apoyar la inversión privada, cuya magnitud es la medida del éxito de una sociedad capitalista”³. Horacio Verbitsky sostiene: “15 jefes de los grandes grupos económicos que durante la dictadura militar pasaron a ocupar un rol central en la economía argentina, acordaron con Alfonsín, durante una comida en Olivos, su apoyo a un nuevo programa económico que debía comenzar con un ajuste sobre el salario. Esa fue su condición para acomodarse a sus anchas en el escenario institucional democrático y abandonar a su suerte a los excomandantes”⁴. Otro periodista, Joaquín Morales Solá, afirma que “a fines de 1984, en un viaje de Alfonsín a los Estados Unidos, Grinspun recibió una estocada fatal aunque de eso él nunca se enteró. Funcionarios de Washington -sobre todo el presidente de la Reserva Federal, Paul Volker- aconsejaron a Alfonsín que pusiera fin a esa política económica sin viabilidad ni coherencia y desplazara del Palacio de Hacienda a ese hombre que tropezaba de desplante en desplante. El Presidente volvió del viaje barajando en su cabeza el nombre del sucesor de Grinspun”⁵. El 19 de febrero de 1985, asume Juan Vital Sourrouille, como nuevo ministro de Economía.

En abril de 1985, con el inicio del juicio a las Juntas, Alfonsín alcanza el punto máximo de su popularidad. En esos días, ante rumores de golpe de Estado, el Presidente convoca a la ciudadanía a la Plaza de Mayo para ratificar su voluntad en favor de la democracia. La respuesta popular es masiva y el 27 de abril, una gran concentración, cercana a las doscientas mil personas, escucha con fervor y expectativa el discurso presidencial. Pero, después de un inicio promisorio, en el cual insinúa que el gobierno está dispuesto a avanzar por terrenos inéditos, el Presidente echa un balde de agua fría a la esperanza popular: sostiene entonces que hay que implantar “una economía de guerra” y que “no habrá mejoras en el nivel de vida”. Luego, informa acerca de la nueva política económica: reducción de gastos del Estado, aumento de impuestos, apoyo crediticio al campo, sanción del “ahorro forzoso” como nuevo mecanismo impositivo y aumento de la inversión extranjera. La desesperanza cunde en buena parte de los manifestantes. Mientras la militancia radical permanece

³ Acuña, Marcelo Luis. *Alfonsín y el poder económico*, Ediciones Corregidor, Buenos Aires, 1995, p. 117

⁴ Verbitsky, Horacio, *Diario Página/12*, 30/4/1989

⁵ Morales Solá, Joaquín. *Asalto a la ilusión*, Editorial Planeta, Buenos Aires, 1991, p. 251



junto al Presidente, grupos pertenecientes al peronismo y a la izquierda se retiran de la plaza. Algunos lo hacen con cánticos como éste:

Ay, ay, ay,
este discurso se lo hizo Alsogaray

El mismo Alfonsín declara, tiempo después: “El FMI trataba de llevarnos a una política recesiva que redujera drásticamente el consumo mediante recursos tales como el mantenimiento de salarios bajos, un incremento de las tasas de interés y una fuerte disminución de las importaciones... Delineamos el Plan Austral: el paso siguiente fue el de mandar una misión económica a los Estados Unidos para persuadir al FMI que aceptara este plan...”⁶. Poco después, en mayo, Sourrouille consulta la nueva política económica, en Estados Unidos, con funcionarios norteamericanos (Paul Volker y James Baker, presidente de la Reserva Federal y Secretario del Tesoro, respectivamente) y con dirigentes del FMI (Jacques de Larrosiere, su presidente). Inmediatamente se adoptan ‘ajustes’ en diversas variables económicas: alza de tarifas, reacomodamiento de los precios y alza, relativamente mucho menor, de los salarios. El argumento para obtener consenso del F.M.I. radica en la propuesta de contener la inflación. A mediados de junio, se pone en marcha el plan Austral. En algunos sectores sociales se mantiene cierta expectativa, en la confianza de que el cambio de moneda -el austral en lugar del peso- pueda significar estabilidad y reactivación. Pero “los salarios -reconoce Morales Solá- comenzaban perdiendo posiciones con esos nuevos aires que ventilaban a la economía argentina”⁷.

Con respecto a la estabilidad económica, los primeros meses de implementación del plan Austral transcurren sin inflación. Pero, con posterioridad, el déficit fiscal vuelve a alimentar el proceso inflacionario. Los ingresos del Estado no alcanzan para cubrir los egresos, ya que éstos se elevan por diversas circunstancias: una de ellas, el cumplimiento de los servicios financieros de la deuda externa; otra, la política de promoción industrial otorgando subsidios o ventajas impositivas a determinadas empresas y además, los planes sociales, expresados a través de las cajas PAN (Plan Alimentario Nacional). Esto obliga al gobierno a aumentar el endeudamiento externo y a aplicar una política de emisión de bonos para recaudar fondos, acrecentando así también el endeudamiento interno.

Puede señalarse que el alfonsinismo inicia -en 1986- el retroceso que lo conducirá, luego, a su claudicación de 1989.

⁶ Alfonsín, R. *¿Por qué, doctor Alfonsín?, conversaciones con Pablo Giussani*, Editorial Sudamericana-Planeta, Buenos Aires, 1987, p. 191

⁷ Morales Solá, Joaquín. ob. cit. p. 257



Alfonsín en la alternativa

Si bien con limitaciones y cierto grado de vacilación frente a cuestiones graves de una Argentina en crisis, puede señalarse que 1984 y 1985 son dos años relativamente exitosos para el gobierno, especialmente por contraposición a “los años de plomo” que quedan atrás. El Estado de Derecho vuelve a imperar y a pesar de sus límites -al regir en una sociedad donde la carencia de recursos económicos impide a gran cantidad de compatriotas el ejercicio real de sus derechos- convierte al Presidente en adalid de los Derechos Humanos, capaz de detener y enjuiciar a las Juntas Militares responsables de tanta muerte y destrucción.

Asimismo, un halo de progresismo y de honestidad envuelve a su gestión. Algunos jóvenes radicales se destacan en los debates parlamentarios y algunas figuras de perfil intelectual convencen a los sectores medios de que la cultura y la inteligencia, después de muchos años, han llegado al gobierno..

En la cancillería, Dante Caputo da la imagen de un diplomático avezado y en el ministerio de Economía, Sourrouille se presenta como un técnico de excelente formación. A ellos se agrega Rodolfo Terragno, quien ha regresado de Europa hablando de biotecnología...y de privatizaciones, como también el sociólogo Juan Carlos Portantiero que oficia de asesor, junto a periodistas como Pablo Giussani y Luis Gregorich. La ley de divorcio y el traslado de la Capital Federal a Viedma apuntan luego, en el mismo sentido, de una política “sensata” y “progresista”.

De este modo, si bien la desilusión del discurso sobre “economía de guerra”, de fines de abril de 1985, incide sobre la militancia, amplios sectores sociales mantienen confianza en el gobierno durante cierto tiempo más. Por eso, en las elecciones del 3 de noviembre de ese año, el alfonsinismo triunfa en todo el país, salvo La Rioja, Formosa, Tierra del Fuego y Corrientes. En la provincia de Buenos Aires, el partido gobernante alcanza 2.377.088 votos, mientras el Frente Renovador del Peronismo obtiene 1.544.353 y el FREJULI (Herminio Iglesias) solo 559.338. En la Capital Federal, los radicales triunfan por 843.000 votos sobre 494.000 votos del Partido Justicialista. En Córdoba, también triunfan obteniendo 743.000 votos sobre 506.000 de la oposición peronista. Estos éxitos electorales, que pudieron haberse considerado como el punto de partida para el tan preconizado “tercer movimiento histórico”, no resultan, en cambio, el momento del despegue sino el techo del alfonsinismo. De allí en adelante, por diversas razones, inicia su declinación a lo largo de 1986. De las promesas transformadoras se pasa a “la administración de la crisis” que , significa, en última instancia, la “administración” de la dependencia.



Al dejar caer a Grinspun, Alfonsín se ha rendido ante el F.M.I. y bien pronto se verían los efectos. Asimismo, el juicio a las Juntas no ha resuelto el problema del resto de los oficiales comprometidos en la represión y un creciente malestar predomina en las Fuerzas Armadas. De este modo, no sólo el presidente radical claudica en la política económica sino también en la cuestión militar.

Sometidos a juicio los integrantes de las Juntas, queda por resolver la situación de todos los militares de graduación inferior implicados en la represión. Para ello, el gobierno considera conveniente sancionar la ley de “punto final”, estableciendo un lapso de 60 días -enero y febrero de 1987- para que los jueces civiles citen a todos los militares responsables de hechos represivos, no pudiendo, después de transcurrido dicho período, realizarse nuevos enjuiciamientos. El gobierno entiende que ese proyecto permite resolver la cuestión militar, que promueve debates permanentes en los cuarteles, pero la oposición se lanza contra él, con fuertes críticas, tanto en el Congreso como en las calles, donde, en diciembre de 1986, se suceden manifestaciones, algunas multitudinarias. A pesar de este disconformismo, el “punto final” es sancionado por la bancada oficialista pero ello no calma las aguas militares sino que éstas se agitan nuevamente pues resultan casos en que son enjuiciados algunos oficiales y no los superiores jerárquicos que han dado las órdenes. Condenar a alguien por haber cumplido una orden -reflexionan los uniformados- significa subvertir todo el ordenamiento de la verticalidad castrense. A partir de estas críticas, en el gobierno se analiza la conveniencia de sancionar una ley de “obediencia debida”, exculpando esos hechos. Pero Alfonsín carece de tiempo -o procede muy lentamente- y en abril de 1987 estalla una rebelión castrense.

Desde tiempo atrás, se han consolidado en el Ejército los llamados “comandos”, que responden a una concepción “nacionalista militar” y se integran con oficiales que luego se conocerán como “carapintadas”. Entre otros, participaban de este movimiento: Rico, Seineldín, Polo, León, Barreiro y Alonso. El grupo proyecta “alzarse”, en defensa de sus derechos, contra los generales que han dado las órdenes, exigiendo una ley protectora.

El detonante del movimiento estaría dado por la citación judicial a uno de los oficiales complotados, el cual no se presentaría, declarándose en rebeldía. Esta situación se produce en relación con el mayor Ernesto Barreiro, en Córdoba. Avalado por el teniente coronel Luis Polo, Barreiro se acuartela el 15 de abril de 1987. Al otro día, jueves santo, León se pliega en el norte, Rico se hace fuerte en Campo de Mayo -viniendo de su regimiento ubicado en Misiones- y Alonso, se insubordina en el Sur. Si bien los sublevados declaran que no pretenden derrocar al gobierno, el Comando en Jefe decide que el General Alais, desde Rosario, avance hacia Campo de Mayo para reducir a uno de los focos rebeldes. Pero dicho general cumple las órdenes con una lentitud premeditada y exasperante, pasando los días sin que cubra los 400 km. necesarios para dar batalla. Después de varias dilaciones, Rico exige la presencia del Presidente, para dialogar, en Campo de Mayo. Alfonsín vacila, en principio, mientras la Plaza de Mayo empieza a llenarse de gente que concurre



a darle apoyo, en resguardo de la democracia en peligro. Luego, ese domingo de Pascuas, el presidente se desplaza hacia Campo de Mayo, mientras se producen manifestaciones populares frente a dicha guarnición militar. Al regresar a la plaza histórica, Alfonsín informa a la concentración popular que los sublevados han depuesto las armas, que “la casa está en orden” y culmina su discurso convocando al pueblo a gozar de unas “Felices Pascuas”. Al día siguiente, los diarios informan que el Poder Ejecutivo diligencia la ley de “obediencia debida”. No obstante que ese proyecto había sido elaborado antes del conflicto, el Presidente pierde credibilidad ante la sociedad civil, difundiéndose la versión de que ha claudicado, aceptando la imposición de los insurrectos. Quince días después, la reglamentación de la “obediencia debida” completa la ley de “punto final”, con lo cual el gobierno pierde el prestigio ganado con el juicio a las Juntas. Ha abandonado una de sus banderas más preciadas y ya no podrá recuperar la confianza adquirida tiempo atrás.

Por otra parte, ni siquiera estas medidas tranquilizan los ánimos de los oficiales disconformes. El enfrentamiento entre los comandos “carapintadas” y los generales subsiste y se expresa, a principios de 1988, cuando Rico vuelve a insubordinarse. Al principio, parece consolidarse en una posición de fuerza en Monte Caseros (provincia de Corrientes), donde declara que no se ha de rendir, pero luego, rodeado por fuerzas superiores, se somete a los mandos superiores. En noviembre de 1988, se produce otra rebelión, esta vez a cargo del coronel Seineldín, quien reclama una amplia amnistía para los militares sancionados. Se repite aquí lo sucedido con Rico: los rebeldes son considerados sublevados, pero sus camaradas de armas no están dispuestos a sofocar el levantamiento. Acantonado en el cuartel de Villa Martelli, el coronel Mohamed Alí Seineldín, cede a la fuerte presión de gran parte de sus propios hombres para alcanzar un acuerdo con el general Cáceres, quien dirige las operativos de represión. El enfrentamiento concluye con la prisión para Seineldín y como contrapartida, la renuncia del Gral. Caridi, militar de tendencia liberal, a la Jefatura del Comando, como asimismo de varios generales. Estas negociaciones corroen aún más la confianza popular en el Presidente Alfonsín.

El gobierno camina hacia el abismo

Del Juicio a la Junta al “punto final” y “la obediencia debida”, de la altivez de Grinspun ante el FMI a la subordinación de Sorrouille ante los grandes poderes externos, de la tradicional política radical de defensa del patrimonio público a las propuestas de privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, SOMISA y Fabricaciones Militares, así como el Plan Houston en materia de petróleo, el gobierno de Alfonsín ha tomado, en 1987, por un camino sin retorno. Más allá de los aspectos formales del gobierno, los grandes consorcios, consolidados durante la dictadura militar, continúan controlando el poder en defensa de sus intereses y de sus socios extranjeros.



El intento oficial de ganarse la simpatía de los trabajadores incorporando a un jefe gremial al ministerio de Trabajo (Carlos Alderete), en marzo de 1987, fracasa a pesar del apoyo de los sindicalistas conciliadores. Saúl Ubaldini continúa expresando el reclamo popular, multiplicando paros generales que para 1989 habrían de llegar a catorce. Mientras la dirigencia política del peronismo muestra graves vacilaciones, este gremialista cervecero se constituye en símbolo del peronismo histórico, según lo ratifican las concentraciones populares: “Saúl querido/ el pueblo está contigo”.

Del mismo modo, el resultado de las elecciones parlamentarias de 1987 expresa el creciente deterioro del gobierno respecto a la opinión popular. Después de aquellas elecciones exitosas del 85, ahora el radicalismo sufre una derrota aplastante: el 6 de setiembre de 1987, el peronismo triunfa en 16 provincias mientras el partido del gobierno sólo gana en Río Negro, Córdoba y Capital Federal. Especialmente, la victoria lograda por el peronismo renovador, liderado por Cafiero, en la provincia de Buenos Aires, significa un duro revés para el gobierno.

P. Justicialista	2.799.000 votos
UCR	2.382.000 votos

En los primeros meses de 1988, la situación se torna aun más dramática para el partido gobernante. El deterioro de los términos de intercambio ha jugado de modo muy fuerte en perjuicio de la Argentina en los últimos años. El endeudamiento externo ha crecido y los servicios financieros constituyen una importante sangría de divisas. Tiempo después, Alfonsín afirma: “Lo que se ha pagado bajo mi gobierno en concepto de deuda externa es una cifra muy similar a la que se ha dejado de percibir por la caída de los precios internacionales...Todo este comportamiento de las naciones industrializadas equivale a querer combatir una hemorragia extrayéndole sangre al paciente”⁸. Por su parte, el Secretario de Coordinación Económica, Adolfo Canitrot declara: “La deuda externa, en las actuales circunstancias, es impagable... La deuda inhibe la inversión privada y la pública. El Estado queda reducido a garantizar el pago de la deuda externa”⁹. El mismo funcionario, agrega, en otra oportunidad, ya convencido de que es imposible ‘persuadir’ a cierta gente: “El imperialismo, mal que nos pese, existe”¹⁰ ..

El drenaje de divisas coloca a la Argentina en una situación de gran debilidad para cumplir sus compromisos financieros y a partir de abril de 1988, el

⁸ Alfonsín, R. *¿Por qué, doctor Alfonsín?», conversaciones con Pablo Giussani*, Editorial Sudamericana-Planeta Buenos Aires, 1987, p. 171

⁹ Canitrot, Adolfo, *Diario Clarín*, 1/2/1986

¹⁰ Canitrot, Adolfo, *Diario Clarín*, 20/4/1988



gobierno suspende el pago de los servicios a los Bancos acreedores, ingresando así en moratoria unilateral.

En agosto, se lanza el llamado “Plan Primavera” que consigue, por unos meses, paliar el crecimiento inflacionario, pero atenta contra la industria nacional, ya sumamente golpeada, al facilitar las importaciones. Sin embargo, los grandes grupos económicos continúan realizando muy buenos negocios. Antes, con la dictadura, los jugosos contratos con el Estado -como ocurrió con las construcciones del mundial de fútbol del 78- generaron la calificación de “patria contratista” mientras que ahora, el régimen de promoción industrial -que provoca falsas radicaciones en zonas marginales- permite hablar de “la patria prebendaria”.

Sobre el fin de año, la situación se complica aun más. El economista Claudio Lozano señala que el Estado argentino está quebrado por diversas razones: 1) el regresivo sistema impositivo: el 64% de la recaudación proviene de impuestos indirectos, mientras los impuestos a la renta, patrimonio y capitales solo significan el 4,9% del total y asimismo, fallan los mecanismos de contralor de los contribuyentes (En 1987, de las 300 firmas más importantes del país, 210 no pagaron un peso de impuesto a las ganancias), 2) la estatización de la deuda privada, realizada al concluir la dictadura militar, ha caído sobre el gobierno alfonsinista significándole alrededor de 20.000 millones de dólares que ha debido afrontar, 3) asimismo, el régimen de promoción industrial implicó transferencias cercanas a los 2.000 millones de dólares, mientras los subsidios otorgados por un estado prebendario sumaron alrededor de 4.000 millones de dólares, 4) otro factor es la Cuenta de Regulación Monetaria, aplicada desde la época de Martínez de Hoz, que significa pagarle intereses a los Bancos por los encajes inmovilizados. “Dada esta situación -concluye este economista- la solución la encontró el gobierno en el endeudamiento interno (festival de bonos) y el endeudamiento externo¹¹. En esos finales del año 1988, la deuda externa ya se acerca a los 60.000 millones de dólares.

A mediados de enero de 1989, la inestabilidad política se acentúa con los sangrientos sucesos ocurridos en el regimiento 3 de La Tablada. Un grupo de militantes del Movimiento Todos por la Patria, dirigido por guerrilleros del ERP, con Enrique Gorriarán Merlo a la cabeza, intenta copar el cuartel con el propósito, según sostiene, de abortar un golpe de derecha “carapintada”. Fuerzas del Ejército sofocan el intento y matan a 28 guerrilleros. El episodio resulta confuso pues algunos sobrevivientes denuncian a altos funcionarios del gobierno alfonsinista por haber alentado el copamiento del regimiento de La Tablada, “en defensa de la democracia en peligro”, abandonando luego a su suerte a los guerrilleros.

Poco después, la situación se agrava debido a la situación financiera que se torna ingobernable. La crisis estalla el 6 de febrero cuando el gobierno, que

¹¹ Lozano, Claudio, Sur, 24/10/1989



está sosteniendo una relación austral-dólar de 17 a 1, deja que el mercado juegue libremente, lo cual ocasiona un encarecimiento progresivo del dólar hasta alcanzar, poco días después, a 29 australes. En marzo, el dólar vale 50 australes, en abril 106 australes y en mayo, 170. La inflación se desboca y se convierte en “hiperinflación”. Algunos grandes consorcios que se jugaron a la estabilidad del peso (por consejo de hombres cercanos a Alfonsín) braman contra el gobierno y niegan toda colaboración, arrinconando al Presidente , a quien le exigen la designación de Adalbert Krieger Vasena o Roberto Alemann, en reemplazo de Sourrouille. Alfonsín resiste la embestida del “establishment” y confía la política económica sucesivamente a dos radicales: Juan Carlos Pugliese y Jesús Rodríguez. Pero ya todo está perdido: es el fin de la ilusión alfonsinista.

El 14 de mayo de 1989 se realizan las elecciones nacionales. Carlos Saúl Menem -que le ha ganado la interna del Partido Justicialista a Antonio Cafiero, en julio de 1988- derrota al candidato radical, Eduardo Angeloz: Partido Justicialista: 7.862.475 (47,36%); Unión Cívica Radical: 5.391.944 (32,49%)

La situación económico-social es caótica. El dinero se licúa en la manos de los argentinos. Se producen saqueos a supermercados. En junio, el dólar vale 380 australes, en julio llega a 580 . La autoridad presidencial ya no existe y Alfonsín debe anticipar la entrega del poder. El 8 de julio de 1989, asume Carlos Saúl Menem.

PRIMERA PRESIDENCIA DE CARLOS S. MENEM (1989-1995)

De la ‘revolución productiva’ a un programa económico neoliberal

El nuevo presidente conforma el siguiente gabinete:

Interior:	Eduardo Bauzá
Economía:	Miguel Roig (reemplazado, poco después, por Néstor Rapanelli y éste, a su vez, por Erman González)
Relaciones Exteriores y Culto:	Domingo Felipe Cavallo
Trabajo:	Jorge Triacca
Educación y Justicia:	Antonio Salonia



Defensa: Italo Luder
Obras y Servicios Públicos: Roberto Dromi
Salud y Acción Social: Julio Corzo

Para el cargo de Secretario General de la Presidencia es designado Alberto Kohan y como Intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Grosso. El nuevo secretario de Prensa y Difusión es Jorge Rachid, mientras Juan Bautista Yofre resulta titular de la SIDE y Moisés Ikonikoff ocupa la oficina de Planeamiento.

Sobre alguna de estas designaciones, en especial en la cartera económica, existen testimonios acerca de que los grandes grupos económicos, consolidados bajo la dictadura militar y que han tenido decisiva influencia sobre el gobierno de Alfonsín, se mueven ahora alrededor del nuevo presidente. Franco Macri recuerda en sus memorias que él, Jorge Born, Amalia Fortabat y Guillermo Khul le “propusieron” a Menem, recién electo, sus dos primeros ministros de Economía: Miguel Roig y Néstor Rapanelli, ambos provenientes de la cúpula ejecutiva del grupo Bunge y Born. También recuerda Macri que en esa reunión, le insistió a Menem para que tuviera en cuenta a Domingo Felipe Cavallo¹².

Esa decisiva influencia de “la nueva oligarquía” sobre el presidente que hasta ayer mismo revoleaba un poncho rojo y ostentaba patillas a lo Facundo Quiroga, no resulta tan sorprendente como parece. Dado el carácter policlasista del peronismo también algunos empresarios lo habían integrado en su primera época (expresados a través de Miguel Miranda y después, de José B. Gelbard), residiendo la diferencia en que mientras los del 45 tenían interés por el mercado interno, los nuevos grupos empresariales -también crecidos en la posguerra, pero consolidados bajo la dictadura “procesista”- prefieren aliarse al capital extranjero y vender en el mercado mundial. Para ello, es condición un bajo nivel de los salarios en la Argentina y eso imposibilita el pacto social o comunidad organizada sustentada por el peronismo histórico del 45, abriendo paso, en cambio, a una política reaccionaria y pro imperialista. Son ellos quienes le han torcido el brazo a Alfonsín y ahora constituyen “el poder detrás del trono” bajo el menemismo.

Por su parte, el imperialismo norteamericano resume su política, en esa época, en el Consenso de Washington, centrada en la desregulación de las economías de países periféricos, para liquidar su aparato industrial y extranjerizar amplias áreas, hasta ayer, en manos del empresariado nacional o del Estado. En el caso argentino, se trata de quebrar la importante franja estatizada de la economía creada por el peronismo en los cuarenta y esa tarea

¹² Macri, Franco, *Macri por Macri*, Editorial Emecé, Buenos Aires, 1997, p. 199



sólo puede realizarse paradójicamente a través de ‘los hombres de Perón’, ahora abrazados al ingeniero Alsogaray, designado asesor presidencial. La hiperinflación desatada en 1989 crea una situación propicia para que “una política de salvataje” consolide un “modelo” apto para los buenos negocios de la minoría oligárquica y del capital extranjero. Por eso, el presidente riojano con aires de Facundo Quiroga pasa a implementar una política económica neoliberal que lo asocia al recuerdo de Bernardino Rivadavia, para la cual la nueva oligarquía le provee los hombres necesarios.

Horacio Verbitsky se refiere, precisamente, a hombres de esa nueva oligarquía que ocupan funciones importantes en el nuevo gobierno: “Macri colocó en la Subsecretaría de Planeamiento a Horacio Escofet...a quien hizo regresar de Guatemala, a Carlos Manuel Ramallo, director de Sideco Americana, a quien ubicó como subsecretario de concesiones y a Osvaldo Pérez Cortés, ubicado junto a Granillo Ocampo, en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia”¹³. Asimismo, a Ricardo Zinn, que será asesor en la intervención liquidadora de Entel, junto a María Julia Alsogaray y Carlos Carballo, para negociar con los acreedores extranjeros “pese a que estaba bajo juicio por 84 defraudaciones durante su desempeño como director del Banco de Italia”¹⁴. Al Ministerio de Obras Públicas va Roberto Dromi, experto en Derecho Administrativo, cuyo estudio, en Mendoza, asesora a los grupos Pérez Companc, Pescarmona, Astra y otros. La dependencia respecto a ese gran poder económico es tal que “del Ministerio de Obras Públicas se decía que quien lo manejaba era Roberto Sanmartino, presidente del área de construcciones del grupo Techint.”¹⁵. En el cargo de Vice-ministro de Obras Públicas es designado Rodolfo Carlos Barra, quien había representado a Techint y Pérez Companc en juicios contra el Estado Argentino. A su vez, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio, Juan Carlos Casagne, había defendido a Bulgheroni (dueño del grupo Bidas) también en juicios contra el Estado, tarea en la que es experto de primera línea -como se ha señalado- el nuevo ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi. Con estilo campechano, el nuevo presidente intenta enmascarar estas conexiones convocando al pueblo argentino a una gran gesta: “Argentina se incorporará el Primer Mundo” y luego, manifestando un supuesto afecto por las grandes mayorías, agrega: “Hermanos, Síganme, que no los voy a defraudar”, para concluir: “Dios los bendiga”. Algún periodista comentaría que el verdadero sentido del saludo es otro: “Dios los ayude”.

Así, quien había prometido “revolución productiva” y “salariazó” se apresura, en sus primeros meses de gestión, a sancionar la Ley de Reforma del Estado, que hace posible las privatizaciones y la Ley de Emergencia económica (suspensión de subsidios y subvenciones, eliminación del “compre nacional”,

¹³ Verbitsky, Horacio, *Robo para la corona*, Editorial Planeta, Buenos Aires, 1992, p. 42

¹⁴ Verbitsky, Horacio, ídem, p. 43

¹⁵ Verbitsky, Horacio, ídem, p. 43



liberalización de las inversiones extranjeras) , convirtiéndose así en figura mimada por la prensa imperialista.

Sin embargo, ni los dos primeros ministros de Economía mencionados, ni el tercero -Erman González, designado en diciembre de 1989- logran controlar la hiperinflación, que reaparece una y otra vez. Recién en 1991, con la designación de Domingo Cavallo, el recomendado en tercer término por Macri, se logra la estabilidad de los precios. El costo, sin embargo, es muy alto: el país pierde sus empresas públicas que configuraban una franja muy importante de su economía, desde varias décadas atrás, al mismo tiempo que incrementa notablemente su endeudamiento externo y deteriora su aparato productivo.

Esa política económica, instrumentada por Cavallo, merece este juicio de Mario Rapoport: “El nuevo programa tenía tres ejes principales de acción. La piedra angular era la Ley de Convertibilidad, que al establecer una paridad cambiaria fija y exigir un respaldo total de la moneda en circulación, trataba de lograr una estabilidad de precios a largo plazo”¹⁶. El Banco Central ya no podría cubrir déficits emitiendo moneda, pues sólo podría hacerlo para comprar dólares de manera que el aumento de circulante se corresponda con un paralelo aumento de reservas. “El segundo eje es la apertura comercial, que busca disciplinar al sector privado, inhibiéndolo para incrementar sus precios ante la competencia externa”¹⁷, es decir, preponderancia del producto importado, estimulado por la libre importación y el tipo de cambio. Aquí reside la causa de la desocupación que crecerá notablemente en los próximos años. “El tercer eje estaba constituido por la reforma del Estado, especialmente el programa de privatizaciones. Se trataba de arribar al equilibrio fiscal, reduciendo el gasto, incrementando los ingresos regulares y sumándole una importante masa de ingresos transitorios con la venta de las empresas públicas”¹⁸. De este modo, la importante franja de empresas estatales surgidas durante el peronismo del 45, cae bajo la égida de multinacionales a las cuales se asocian varios consorcios nativos de los que integran la nueva oligarquía.

El modelo neoliberal funciona así, con el mercado por centro, cuya “mano invisible” -se dice- asigna correctamente los recursos, para beneficio de todos. En el lenguaje popular , esta política significa “vender las joyas de la abuela “ (las empresas públicas), financiando con esos ingresos y con nuevo endeudamiento externo, una paridad cambiaria irreal, que se considera clave para detener la inflación.

La extranjerización se manifiesta paralelamente en la política exterior sustentada por el nuevo canciller, Guido Di Tella -reemplazante de Cavallo al pasar éste de canciller a ministro de Economía- quien predica “las relaciones

¹⁶ Rapoport, Mario, *Historia política, económica y social de la Argentina*, Ediciones. Macchi, Buenos Aires, 2000, p. 973

¹⁷ Rapoport, ídem

¹⁸ Rapoport, ídem



carneles con los Estados Unidos”, cuya primera expresión se da, en 1990, con el envío de tropas argentinas al Golfo Pérsico, en apoyo de la aventura imperial de los yanquis. Asimismo, en setiembre de 1991, Argentina se retira del grupo de Países No alineados, satelizando así su política exterior, respecto a Estados Unidos.

Algunos analistas aventuran que este giro en la política internacional, habría sido la causa, al traicionar Menem sus compromisos con los países árabes, de la voladura de la embajada de Israel, atentado producido el 17 de marzo de 1992. Se trata del “ atentado más grave desde los años 70 e incorpora brutalmente a la Argentina al escenario del terrorismo internacional”, según comenta la prensa.

En materia de Derechos Humanos ya se ha verificado un grave retroceso: sobre el final de 1990, Menem, después de sofocar un alzamiento del teniente coronel Seineldín, otorga el indulto a los jefes militares sentenciados bajo el gobierno anterior, como asimismo a varios jefes montoneros .

“Robo para la corona”

La poderosa franja de empresas estatizadas, boicoteada desde 1955 por distintos gobiernos, había logrado subsistir, sin embargo, generalmente defendida por los legisladores peronistas como ocurrió cuando Alfonsín pretendió avanzar en la política privatizadora, en base a los proyectos de Rodolfo Terragno. Pero, ahora, desde el propio peronismo, se lleva a cabo su destrucción.

Debe quedar en claro que no sólo resulta cuestionable la privatización en sí, sino, además, su instrumentación, en notorio perjuicio de los intereses nacionales. En la mayoría de los casos se produce una subvaluación de los activos y asimismo, el Estado toma a su cargo el pasivo existente. También se aplica el sistema de capitalización de deuda externa, por el cual una parte del pago lo efectúan los inversionistas entregando títulos de deuda, que han comprado previamente en el mercado al 25% de su valor nominal, pero que el Estado se los recibe al 100% o poco menos del valor nominal, constituyendo un pingüe negocio para los inversores. Otro mecanismo consiste en fuerte alza de tarifas, previa a la privatización, para darles rentabilidad a las empresas, saqueando los bolsillos de los usuarios. En el caso de la empresa telefónica, su interventora -María Julia Alsogaray- eleva las tarifas, previamente a la privatización, en 433%, es decir, 43 veces, para entregársela con rentabilidad a los consorcios. Así, en dos años, Telefónica y Telecom, los adquirentes, recuperan el capital invertido y comienzan a girar utilidades al exterior, merced a la política de libertad absoluta para entrada y salida de divisas. En el caso de Aerolíneas Argentinas, los adquirentes se endeudan para comprar pero en el



primer balance de la empresa privatizada, los préstamos contratados, que son personales, aparecen registrados como pasivo de Aerolíneas, de tal manera que cualquier menesteroso podría haber comprado en esas condiciones. A los pocos años, Aerolíneas ha perdido su plantel de 28 aviones, debiendo prestar el servicio con máquinas alquiladas.

En el caso del sistema ferroviario, se aplica la privatización a los ramales más rentables y se levantan las demás, reduciendo notablemente la red en funcionamiento, con el efecto consiguiente: pueblos fantasmas y miles de ferroviarios despedidos. Del mismo modo, se destruye la flota mercante que en 1950 figuraba entre las diez más importantes del mundo. En el caso de las concesiones de rutas -peaje a cambio de supuesto mantenimiento- se hace público que la mayor parte de los pliegos de condiciones han sido confeccionados previamente por los abogados de los mismos consorcios que ganan las licitaciones.

De tal modo que las privatizaciones no sólo significan extranjerización sino drenaje de riqueza al exterior. Además, generan corrupción, a la cual se suma la proveniente de otras actividades ligadas al Estado.

En la privatización del Polo Petroquímico Bahía Blanca, que manejan José Luis Manzano y Jorge Geraige, se produce uno de los primeros escándalos, por coimas. Manzano, un joven peronista de Mendoza, pasará a la historia con una frase, que repite cuando le imputan latrocinio: “Yo robo para la Corona”. Con esta analogía con los piratas servidores de los imperios, intenta blanquear esas negociaciones que en poco tiempo lo convierten en un potentado.

Los negociados se suceden. Ya en 1990, un diario ha publicado una boleta de depósito bancario de Eduardo Menem, hermano del presidente, por casi medio millón de dólares en el Banco Pan de Azúcar del Uruguay. Para la misma época, ha saltado un negociado con guardapolvos en el que aparece comprometido Eduardo Bauzá, de estrecha vinculación con el Presidente. En abril, unos afiches callejeros intentan vanamente depurar al menemismo de esos personajes : “Lealtad a Menem pero no a los delincuentes” y a éstos se los designa así: “José Luis Petroquímica Manzano, Eduardo Guardapolvo Bauzá, Eduardo Pan de Azúcar Menem y Roberto Cometa Dromi”.

En 1991, el embajador norteamericano Todman denuncia que Emir Yoma, cuñado del Presidente de la Nación y encargado de los negocios de la familia Yoma, le ha solicitado una importante coima para destrabar un negocio con el frigorífico yanqui Swift. El escándalo pasa a la historia como el Swiftgate. Para la misma época, los diarios informan acerca de la presunta participación de Amira Yoma, directora de Audiencias de la Presidencia y también cuñada del Presidente, en una organización internacional dedicada al narcotráfico y lavado de dinero. Figuran implicados, su esposo, Ibrahim Al Ibrahim y Mario Caserta, titular del Consejo Federal de Agua potable y Saneamiento. En esa primera



época del gobierno se percibe ya la sensación de que una banda se ha apoderado del Estado y lucra desde las altas esferas.

Pocos meses después, estalla otro escándalo en el cual se halla involucrado Miguel Angel Vicco, secretario privado de Menem. Se trata de importantes partidas de leche en polvo en mal estado que fueron vendidas al Estado por la empresa ERA, propiedad de Vicco. En concomitancia con este fraude, aparece como responsable de la producción de esa mercadería no apta para el consumo, la empresa Suimmum, de Córdoba, propiedad de Carlos Spadone, otro hombre cercano al Presidente.

A pesar de que, en varias áreas de su gestión, el gobierno evidencia alejarse de las banderas históricas del peronismo, y a pesar también de que trascienden los mencionados casos de corrupción, acompañados por un clima de farándula y frivolidad en lo alto del poder, las mayorías populares optan todavía por acompañar la nueva experiencia. Así, en las elecciones de setiembre de 1991 (en trece distritos), el Partido Justicialista triunfa en diez, el radicalismo gana en Córdoba (Angeloz), en Capital Federal (De la Rúa) y un partido provincial triunfa en Neuquén (M.P.N.). En la provincia de Buenos Aires, Duhalde obtiene un contundente triunfo. Osvaldo Soriano señala entonces que, “una moneda estable y una inflación moderada pueden más que las denuncias sobre escándalos y las consideraciones éticas... El electorado votó mayoritariamente como el nuevo establishment quería, porque la gente le teme más a la incertidumbre de las promesas que a su dolorosa realidad cotidiana”¹⁹.

Si bien el aparato político del Partido Justicialista acompaña la nueva política - admitiendo inclusive el beso de Menem al Almirante Rojas- se producen fuerte disenso en los sectores más combativos del movimiento. En el Congreso, se constituye “el grupo de los ocho”, marginándose varios diputados, en rebeldía, del resto del bloque oficialista. Entre ellos se destacan Germán Abdala, Julio Darío Alessandro, “Chacho” Álvarez y Luis Brunatti. Asimismo, diversas reacciones se producen en el ámbito sindical. Por un lado, los trabajadores afectados por las privatizaciones salen a luchar, como en los casos de telefónicos y personal de Aerolíneas, mientras se funda y crece el CTA (Congreso de los Trabajadores de la Argentina), apoyado en ATE y CTERA. Por otro lado, se gesta una corriente oficialista (la CGT de San Martín, con Triacca y Barrionuevo, entre otros), manteniéndose el resto del sindicalismo en posición crítica (la CGT de Azopardo, bajo la conducción de Ubaldini). Sin embargo, Luis Fanel sostiene que “esa resistencia de Ubaldini fue tímida e indecisa pues temía aislarse respecto a las masas peronistas que habían votado a Menem en 1989”²⁰. Y agrega, esta reflexión aún más importante: “Al transformarse el justicialismo y ‘actualizar’ su propuesta con el plan de modernización de la dependencia, abandonando los postulados de liberación

¹⁹ Soriano, Osvaldo, Diario Página12, octubre de 1991

²⁰ Fanel, Luis, *La alternativa ausente*, Ediciones Dirple, Buenos Aires, 1999, p. 203



nacional, justicia social y alianza con los trabajadores, la mayoría peronista del movimiento obrero quedó huérfana políticamente”²¹.

Ese desconcierto proviene de que gobiernan quienes han sido “los hombres de Perón”. Son ellos los que no sólo destruyen las empresas públicas creadas por el líder, sino que avanzan ya contra las conquistas sociales: topes a las indemnizaciones, creación de las ART (Aseguradoras de Riesgo de Trabajo), jubilación privada en reemplazo del sistema estatal y más tarde, flexibilización laboral, en abierta contradicción con los viejos postulados partidarios.

Menem argumenta ahora que Perón hubiese hecho lo mismo dadas las nuevas condiciones mundiales, lo cual genera hondas dudas en las masas populares. Ese mantenimiento del caudal electoral, a pesar de la traición al programa histórico, resulta de difícil explicación para algunos analistas. Sin embargo, juegan aquí dos factores importantes: por un lado, la memoria histórica de lo que significó el peronismo del 45, movimiento al cual pertenecen los hombres que gobiernan y por otro lado, la incapacidad de la oposición radical y de la izquierda para conquistar la confianza popular con un programa alternativo, superador del sostenido por Menem.

El consenso coyuntural logrado por el menemismo

A partir del primero de enero de 1992, se fija la nueva moneda -el peso- a un valor equivalente al dólar. El Banco Central solo puede sumar dinero al mercado con un respaldo del 100% de reservas libres, sólo posible con ingreso de divisas “En este marco -señala Rapoport- el peso queda transformado de hecho en un vale por un dólar, de aplicación dentro de las fronteras nacionales, actuando exclusivamente como unidad de cuenta, mientras que las demás funciones del dinero son satisfechas por el dólar, lo cual implica la renuncia a los principales instrumentos de política monetaria”²². A pesar de la gravedad de una política de este tipo que nos deja sin moneda, la circunstancia de que se vaya logrando cierta estabilidad - alejándose al fantasma de la inflación- le permite al gobierno ganar la confianza de amplios sectores de la sociedad.

La angustia con que los argentinos han sufrido la hiperinflación convierte a la estabilidad económica en uno de los objetivos más deseados. De aquel abismo en que ha caído, el país parece mostrar tendencia a la recuperación . El ingreso de capitales externos

genera una cierta reactivación, al tiempo que reaparece el crédito al consumo permitiendo, a través de planes de facilidades, el reemplazo de artículos del

²¹ Fanel, Luis, *La alternativa ausente*, Ediciones Dirple, Buenos Aires, 1999, p. 203

²² Rapoport, ob. cit, p. 977



hogar ya envejecidos (desde lavarropas hasta heladeras, cocinas, y en algunos sectores sociales, inclusive automóviles).

El alza de precios de los productos que exporta la Argentina, gradual pero sostenido hasta 1997, permite el aumento de las exportaciones, no obstante la paridad cambiaria perjudicial. El P.B.I. crece en esos años, pero al aumentar también las importaciones, las cuentas del comercio exterior se resienten especialmente en lo que atañe al balance de pagos debido al drenaje de utilidades de las multinacionales y los servicios de la deuda externa.

Por entonces, un fenómeno nuevo comienza a observarse en las elecciones: el menemismo mantiene la antigua influencia del peronismo en los barrios más populares, pero ahora gana también en las circunscripciones del Barrio Norte donde vive la gente rica. Esa curiosa alianza entre este caudillo peronista proveniente de una de las provincias más pobres del país (La Rioja) con economistas liberales y figuras que siempre han tenido el apoyo de los poderosos, como Alsogaray, lleva a la coincidencia de las circunscripciones más pobres y más ricas, mientras en las centrales, donde predomina la clase media, crece la oposición al gobierno, movida por causas diversas: algunos, porque se ha malvendido el patrimonio nacional, otros, por principios éticos ante los latrocinios menemistas y otros, inclusive, solo por tratarse de un presidente “peronista, provinciano y morocho” expresión de la vieja “barbarie” criticada por Sarmiento.

Este realineamiento político de las fuerzas sociales se expresa en las elecciones para senador, de junio de 1992: en la Capital Federal, el radical De la Rúa alcanza casi el 50% de los votos, derrotando al menemista Porto (31,79%) , sorprendiendo la aparición de una fuerza nueva -El Frente del Sur- liderado por el cineasta Pino Solanas, que alcanza el tercer lugar. En esa elección, el menemismo gana solo dos distritos de Capital Federal: Recoleta (en el norte) y Villa Lugano (en el sur). El Modín, de Aldo Rico, con un discurso semejante al del peronismo histórico, ocupa el cuarto lugar.

Durante ese año -1992- se acentúa la presión de los acreedores externos para regularizar el pago de los servicios de deuda externa. Al dejar de cumplirse regularmente con ellos, los títulos han perdido valor (algunos, cotizan al 18% del valor nominal) y la negociación consiste en el reemplazo de los mismos, en otras condiciones, con la posibilidad de una quita. Nicolás Brady representa a los acreedores y el gobierno argentino designa a Daniel Marx, para esa gestión. Así se concreta, poco después, el Plan Brady, que consiste en que Argentina acepte canjear los bonos depreciados por otros nuevos, garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos, a cambio de una refinanciación de los pagos, con mayores intereses, obteniendo una pequeña quita del 4,33% del total. En esta negociación financiera ganan los Bancos, que revalorizan sus títulos y además, consiguen transferirlos a inversionistas privados. Alfredo Eric Calcagno señala, entonces, que en vez de revalorizar los títulos, debió



intentarse la compra de los mismos lo cual hubiese permitido cancelar la deuda externa pagando solamente el 18% de la misma. Semejante solución no entra en los cálculos de Marx, quien acuerda con los lineamientos generales trazados por Brady de manera tan exitosa que éste lo convierte, poco después, en su socio para otro negocio financiero.

En esa misma época, cuando el sueldo promedio de un trabajador alcanza a \$ 400.-, el ministro de Economía Domingo Cavallo se enoja con los periodistas y les declara: “No es irritativo que yo gane diez mil pesos mensuales... porque yo debo gastarlos, porque el nivel de vida que debo desplegar requiere ese monto”²³. Asimismo, aclara que el 90% de esos ingresos no provienen de su función como ministro sino que los recibe de la Fundación Mediterránea, entidad privada que agrupa a las principales empresas radicadas en el país²⁴.

Esta confesión del ministro no escandaliza a la prensa ni a la mayoría de los políticos quienes consideran normal que Cavallo maneje la economía argentina y al mismo tiempo, sea empleado de un grupo de empresarios. El grado de corrupción que recorre los poderes públicos aparece ratificado, meses después, cuando el ministro del interior Gustavo Beliz renuncia al cargo y califica al menemismo “como una estructura corrupta”²⁵.

No debe extrañar, pues, que a fines del 92 -el 9 de noviembre- se realice el primer paro general de la CGT, reclamando aumentos de salarios y jubilaciones, cumplido con fuerte apoyo en el cordón industrial, pero con menor repercusión en el comercio y los bancos.

Poco más tarde, primer semestre del 93, empiezan a observarse los primeros síntomas de que el modelo económico implantado provoca funestas consecuencias sociales. Ese año, el desempleo llega al 9,9% para alcanzar en 1994, el 10,7% mostrando cifras superiores en los años siguientes. Uno de los factores determinantes de este aumento de la desocupación proviene de los despidos efectuados por los nuevos dueños de las empresas privatizadas y del ajuste en la administración pública central y de las provincias. El otro es el cierre de fábricas, destruidas por la competencia del artículo importado.

Sin embargo, todavía el gobierno mantiene altos índices de apoyo popular. En las elecciones del 3 de octubre de 1993, el radicalismo triunfa solamente en Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca y Río Negro, mientras las demás provincias muestran triunfos contundentes del Partido Justicialista. Los votos logrados en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (donde triunfa por más de 20 puntos sobre el radicalismo) enfervorizan al oficialismo. El Modin, de Aldo Rico, se perfila como la tercera fuerza, mientras resulta importante la

²³ Cavallo, Domingo, Diario Página12; 6/11/1992

²⁴ ídem

²⁵ Diario Página12, agosto 1993



elección del Frente Grande, con el 13% de los votos en la ciudad de Buenos Aires.

Esta victoria a nivel nacional convence a los dirigentes menemistas de la necesidad de impulsar la Reforma Constitucional para posibilitar la reelección de Menem. Los grandes consorcios apoyan el proyecto. El radicalismo, fuertemente golpeado y ante la posibilidad de que el Partido Justicialista instrumente la Reforma constitucional por sí solo y según su exclusivo criterio, prefiere conciliar: de ahí que Alfonsín se avenga al Pacto de Olivos con Menem, celebrado el 14 de noviembre de 1993, mediante el cual los dos partidos mayoritarios acuerdan convocar a elecciones para reformar la Constitución.

El 10 de abril de 1994, los argentinos van a las urnas para elegir convencionales constituyentes. El menemismo triunfa, alcanzando 6.092.335 (38%). El radicalismo ocupa el segundo lugar con 3.114.166 votos (20%) y el Frente Grande obtiene 1.800.000 (13%). Algunos analistas advierten que la abstención y el voto en blanco evidencian una tendencia creciente que indicaría el grado de descreimiento por parte del pueblo. Asimismo, llama la atención el crecimiento del caudal electoral del Frente Grande, fuerza que obtiene el triunfo en la Capital Federal, con 38% de los votos y el segundo lugar en la Provincia de Buenos Aires. Con relación a 1993, el Justicialismo pierde 6% de sus votos, el radicalismo pierde el 10% y en cambio, el Frente Grande gana 9% de los votos. También el Modin, de Aldo Rico, muestra crecimiento pasando del 6% al 9%.

En esos meses, se evidencia un clima social caldeado, de protestas populares. Ya a mediados de diciembre del 93, la sociedad se ha conmovido ante el santiagueño, cuando una multitud incendió la Gobernación, la legislatura, los tribunales y varias casas de dirigentes políticos, con cuatro muertos como saldo trágico. En marzo del 94, una protesta de trabajadores estatales, en Jujuy, concluye con un ataque a la Casa de Gobierno provincial, y el 12 de abril de 1994, al producirse una concentración popular en Ushuaia, muere un obrero de la construcción -Víctor Choque- en un enfrentamiento con la policía. No se trata, sin embargo, de una reacción generalizada y orgánica de la clase trabajadora, sino de reacciones espontáneas, localizadas en las provincias donde el ajuste fiscal es más severo, según las exigencias del FMI.

El 25 de mayo de 1994, Menem abre la Convención Constituyente, que tiene a su cargo el remozamiento de la vieja Carta Magna. El 24 de agosto, la Convención jura el nuevo texto constitucional, en el cual se modernizan varias disposiciones: creación de la jefatura de gabinete, elección directa del intendente de Buenos Aires, convertida en ciudad autónoma, así como designación de tres senadores por provincia, creación del Consejo de la Magistratura para la remoción y designación de jueces y reelección del presidente, por una sola vez, acortando el mandato a cuatro años.



Por entonces, en el Frente Grande se acrecientan las diferencias entre Chacho Alvarez y Fernando “Pino” Solanas. Tanto Alvarez como otros dirigentes se manifiestan respetuosos del modelo socio-económico vigente, negándose a confrontar con la estabilidad y las privatizaciones, mientras Solanas sostiene la necesidad de reestatizar YPF y una política enérgicamente reactivadora. Algunos grupos del Frente Grande acusan a Alvarez de derechizar la agrupación, hacia una posición llamada “progresista” que permitiría captar a los sectores medios, lo cual facilitaría su triunfo electoral, pero al precio de abandonar sus posiciones programáticas.

El 6 de julio, se cumple la Marcha Federal, organizada por las fuerzas gremiales opositoras al gobierno (CTA, disidentes de la CGT y piqueteros) que recorre el país desde sus extremos, culminando con una gran concentración calculada entre 60.000 y 80.000 manifestantes en Plaza de Mayo.

Poco después, el 18, se produce un nuevo atentado a una organización de la colectividad judía: la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA) Se trata de una explosión de gran magnitud y enorme poder destructor con el trágico resultado de 85 muertos y más de 300 heridos.

En esa época -2^{do}. semestre de 1994- el gobierno, envanecido por el triunfo, impulsa una segunda oleada de privatizaciones (correo, aeropuertos, centrales nucleares y otras). Asimismo, atento al escándalo producido por el asesinato de un conscripto -el soldado Carrasco- Menem cabalga sobre la tendencia antimilitarista abstracta que prevalece en amplios sectores sociales -genuino resultado de la dictadura militar- para eliminar el servicio militar obligatorio, medida que concita gran aprobación. Sin embargo, varios episodios demuestran la disconformidad con la política económica: se producen conflictos gremiales en varias provincias, destacándose la participación de los trabajadores estatales (ATE).

Lo más grave proviene ahora de la crisis mejicana. pues el gobierno de ese país debe devaluar, en diciembre de 1994, suspendiendo el pago de la deuda externa, generando el llamado “efecto tequila” que siembra recesión en varios países. En la Argentina se expresa en fuga de capitales y retiro de depósitos de los bancos. En esta época -el 15 de marzo de 1995- muere “Carlitos” Menem Jr., el hijo del Presidente, en un dudoso accidente aéreo ocurrido cerca de Ramallo , caratulado inicialmente como accidente de aviación. Tiempo después, con el denodado esfuerzo de Zulema Yoma, madre de la víctima, logra probarse que el helicóptero no se enredó accidentalmente en un cable, sino que fue tiroteado por un grupo comando, provocando su caída y la muerte del joven.. En esos meses -diciembre 1994 a abril de 1995-, nuevamente se producen paros generales, liderados por el sindicalismo combativo.

A su vez, el escenario político muestra que la declinación del radicalismo se acentúa mientras la oposición al menemismo gobernante comienza a expresarse a través de la fuerza que lideran Alvarez y Fernández Mejjide, que



ha venido creciendo en importancia en los últimos tiempos. Pero allí se ha profundizado la disidencia entre Alvarez y Solanas, así como el acuerdo del primero de ellos con Bordón. Este último gana la interna y el FREPASO (Frente País Solidario) lleva la fórmula Bordón -Alvarez, en las elecciones presidenciales para el período 1995-1999. El Partido Justicialista propicia la reelección de Menem, siendo acompañado en la fórmula por Carlos Ruckauf, mientras el Radicalismo lleva como candidato a presidente a Horacio Massaccesi, político de Río Negro.

Producidas las elecciones -el 14 de mayo de 1995 -Menem se impone por 8.686.685 votos a la fórmula Bordón- “Chacho” Alvarez, que obtiene 5.095.974 votos y a Massaccesi, con 2.956.101 votos. Los porcentajes son respectivamente: 49,92%, 29,29% y 16,99%. La mayoría de los argentinos ha elegido vivir bajo el menemismo cuatro años más.

Este resultado electoral promueve polémicas. Algunos sostienen que se ha quebrado la supuesta ley de que “el pueblo no se equivoca”, pues ha ratificado la gestión menemista, cuyos resultados son: aumento del endeudamiento externo, satelismo en política internacional, crecimiento de la desocupación y escandalosos negociados. A este respecto, Horacio Maceyra reflexiona: “Y ahora, ¿qué? Lo que no quiere la gente es que se altere la estabilidad. Se aferra a eso como lo más importante, sin importarle la corrupción, la venta del patrimonio nacional y la concentración del ingreso. Prefiere que siga esto, que le permite malvivir, a que siga la hiperinflación que en 1989 la empujaba al abismo. El pueblo no se equivoca, en el sentido de que no percibe alternativas. “Y realmente, no las hay”. (Obsérvese que el propio Alvarez manifiesta que en modo alguno pueden tomarse medidas que hagan peligrar la estabilidad alcanzada). “La gente -agrega Maceyra- ha sido persuadida de que no es posible otro país... La información que la gente tiene indica que la alternativa es esto o el caos: prefiere esto... En este momento, la clase trabajadora no está a la búsqueda de nada. Esta es la verdad. Hay que esperar el desgaste lento de esto”²⁶. Otros analistas destacan que los votos en blanco y las abstenciones continúan en ascenso, de elección en elección -llegan ahora entre el 25 y 27% del total del padrón- revelando una creciente distancia entre el electorado y los dirigentes políticos que deberían representarlo. Algunos explican las razones del triunfo menemista basándose no sólo en que el pueblo desea mantener la estabilidad, sino que opera también la memoria histórica que promueve fidelidad hacia el partido gobernante. Finalmente, otros aducen que el menemismo carece de una oposición política fuerte, que se presente como alternativa posible y explican que mientras el Frente Grande se fue deslizando cada vez más a posiciones “progresistas” o de centro izquierda, el Modin , que venía creciendo en base a una posición contestataria, cayó notablemente en su caudal electoral a partir del acuerdo sellado por Rico con Duhalde, para

²⁶ Maceyra, Horacio, informe, 1995



asegurarle la gobernación de la provincia. La dirigencia política argentina, de derecha a izquierda, parece haber salido del “proceso” y del alfonsinismo sin aprender nada, ni realizar autocrítica alguna que le permita corregir sus errores. En ese escenario, a Menem le basta, para mantenerse en el poder, con algunos rasgos personales que lo tornan simpático al sector popular, con el clientelismo político y “la estabilidad”, concurriendo asimismo la memoria que ha dejado el peronismo histórico.

José Nun analiza, en esa época, algunos de los aspectos personales del Presidente: “Me refiero a la simpatía y a la seguridad irradiadas por Menem en sus constantes apariciones públicas, más allá de sus abundantes contradicciones, errores, etc. Su caso se asemeja al de Ronald Reagan y confirma que la televisión crea, sobretodo, impresiones: la mayor parte de la audiencia atiende mucho menos a aquello que se dice, que a la manera en que se lo dice, al “mood”. A la vez, como enseñan los comunicólogos, para resultar persuasiva una fuente debe aparecer como un poco, pero no demasiado superior al público, al cual se dirige. En esto han intervenido eficazmente el lenguaje simple y conciso del Presidente, su estilo campechano y hasta el modo en que realiza por delegación los sueños más elementales de muchos de sus seguidores: jugar en los seleccionados nacionales de fútbol o de basquetbol, codearse con la mayor cantidad posible de estrellas del show business, participar en los programas de moda, etc”²⁷. Es decir, actitudes, gestos y lenguaje que significan, de algún modo, “ser como uno” para los sectores de menores recursos. A tal punto es así que, a la inversa, la simple imagen de Menem, con sus patillas y tez cobriza, provocan la repulsa de los sectores medios y altos, tomados por la colonización pedagógica, que seguramente habrían aprobado la política económica menemista si la hubiera realizado un presidente blanco, rubio y de ojos azules.

La segunda presidencia de Menem (1995-99)

El 8 de julio 1995, Menem asume por segunda vez la presidencia de la Nación. Su gabinete se compone así:

Interior:	Carlos Vladimiro Corach
Relaciones Exteriores:	Guido Di Tella
Economía y Obras y Servicios Públicos:	Domingo Felipe Cavallo
Defensa:	Oscar Camilión

²⁷ Nun, José, Diario Página12, 3/7/1994



Salud y Acción Social:	Alberto Mazza
Trabajo y Seguridad Social:	José A. Caro Figueroa
Justicia:	Rodolfo Barra
Educación:	Jorge A. Rodríguez

El presidente se halla eufórico y entiende que vive su momento político más trascendente, consolidado en el poder, consagrado como indiscutido líder popular. Sin embargo, por esas paradojas en que se complace la Historia, en ese momento se inicia su derrumbe. “Durante cuatro años -1990-1994- la economía se mantuvo en una senda de crecimiento -señala Rapoport- basado fundamentalmente en el consumo interno como factor dinámico... El ahorro externo financió gran parte del consumo y sostuvo el crecimiento económico, pero la situación se revirtió en 1995”²⁸. A partir de entonces, liquidadas ya buena parte de las “joyas de la abuela”, caen notoriamente los ingresos por privatizaciones. Los ajustes en la administración central y en las provincias provocan un acentuado crecimiento del desempleo: de 9,9% en 1993, pasa a 10,7% en 1994 y a 18,4% en 1995. El aumento de la desocupación, como asimismo las disposiciones de la llamada ‘flexibilización laboral’, provocan la pérdida de conquistas logradas, en muchos años de lucha, por los trabajadores. La balanza de pagos arroja fuertes déficits: 1994: -11.138; 1995: -5.197; 1996 : -6.825. Se dispara entonces el crecimiento de la deuda externa : de 60 mil millones de dólares, en 1992, pasa a 69 mil en 1993, a 80mil en 1994 y a 87mil millones de dólares en 1995, con el peso creciente de sus servicios.. Los índices macroeconómicos se tornan desfavorables y comienzan a mostrar que el modelo está agotado: aumenta la concentración del ingreso, crece la deuda externa y crece asimismo la fuga de capitales. El aparato productivo nacional ha sido quebrantado en gran medida por la libre importación, provocando desocupación y subocupación, así como “trabajo en negro”. Por otra parte, el achicado aparato industrial se ha extranjerizado debido a adquisiciones realizadas por el capital extranjero, en muchos casos de empresas argentinas tradicionales, como Terrabusi, Bagley, Canale, Llauro, Colorín, La Vascongada, Santa Rosa, La Suipachense, Ginebra Bols, Casa Tía, Guereño, Cinzano y otras. En 1990, 116 empresas extranjeras, facturaban el 33,6% del total de ventas de las 500 empresas más grandes. En 1995, entre las primeras 500 , son extranjeras 214 y su facturación supera el 50% del total .

Por otra parte, la creación de las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y pensiones) que privatiza gran parte del sistema previsional, obliga al Estado a cubrir con fondos propios el pago de los haberes jubilatorios (agravando el déficit fiscal). Asimismo, el déficit acumulado de la cuenta

²⁸ Rapoport, ob. cit., p. 980



corriente externa alcanza, entre 1992 y 1998, a 63.500 millones de dólares, cifra coincidente con el crecimiento del endeudamiento externo.

A estas dificultades se suman nuevos escándalos: estalla el asunto “IBM-Banco Nación Argentina”. Carlos Cattáneo, secretario general de la presidencia, aparece involucrado en un contrato de informatización, celebrado con IBM, para 525 sucursales del Banco Nación, por un total de 250 millones de dólares, del cual habría resultado una coima de 37 millones de dólares. Por otra parte, el ministro Cavallo acusa de mafioso al empresario Alfredo Yabrán, ligado al poder, quien maneja varias empresas relacionadas con el servicio del Correo. En algunos medios se afirma que Cavallo pretendió forzar a Yabrán a una explotación mixta con una empresa norteamericana, fracasando en el intento y que esto dio origen al enfrentamiento.

La cuestión social también se agrava. En setiembre, los empleados estatales rionegrinos enfrentan a la policía y cometen destrozos e incendios en edificios públicos, en razón del atraso de sus sueldos. Poco después, 400 desocupados atacan a la Casa de Gobierno, en Neuquén. El Presidente, ante la presión de los sindicalistas, da marcha atrás en sus avances dirigidos a que las obras sociales de los sindicatos compitan con las empresas de medicina prepaga. Tampoco los radicales gozan tranquilidad, pues ahora es sometido a investigación el senador por Córdoba Eduardo Angeloz, en varias causas por enriquecimiento ilícito.

El agotamiento de la política económica implementada por Menem y Cavallo se observa no solo en los índices estadísticos, sino también en la confesión de algunos cómplices del gobierno, como el gremialista Oscar Lescano, del Sindicato de Luz y Fuerza. En febrero de 1996, Lescano reconoce: “Menem está supeditado a los grandes capitales. Tengo cargo de conciencia porque sé que no defendimos a los trabajadores como correspondía...Yo apoyé las privatizaciones y todo eso. Es verdad. Pero hoy estoy arrepentido. Si tengo 50% menos de afiliados, algunos trabajando de contratistas, degradados, sin seguridad social, con casi el 50% menos del salario...¿cómo puedo estar de acuerdo?”²⁹. Poco después, otro gremialista, Lorenzo Miguel declara: “Las conquistas laborales están prácticamente perdidas en la Argentina... En el año 1976, en mi gremio, éramos 600.000 metalúrgicos, en 1985 llegábamos a 300 mil y hoy (junio 1996), no pasamos los 200 mil”³⁰. Asimismo, en la Patagonia, el 20 de junio se encienden los primeros piquetes en Cutralcó y Plaza Huincul, con cortes de rutas.

Crecen, entonces, las críticas contra Cavallo por parte de gremios y partidos populares, mientras, el secretario de estado norteamericano, Warren Christopher declara: “Cavallo es un héroe en los Estados Unidos, por impulsar, junto al presidente Menem, la economía argentina y transformar ese país”.

²⁹ Lescano, Oscar, Diario Página12, 17/2/1996

³⁰ Lorenzo Miguel, Diario Página12, 6/6/1996



David Mulford, por su parte, ya ha declarado que “el ministro Cavallo es un hombre único”³¹.

Las dificultades en que se debate el gobierno se expresan por primera vez, en las urnas, al producirse las elecciones del 8 de octubre de 1995, para senador. En esa ocasión, el FREPASO realiza una elección muy importante en Capital Federal, triunfando Graciela Fernández Meijide, por más de veinte puntos sobre el Radicalismo que obtiene el segundo lugar, correspondiéndole al justicialismo el tercer puesto. Los respectivos porcentajes son: 45,7%. 24,2% y 22,6% .

Esta nueva tendencia se corrobora el 30 de junio de 1996 en las elecciones por la intendencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Allí compiten Gustavo Beliz (Nueva Dirigencia), Fernando de la Rúa (UCR), Norberto La Porta (FREPASO) y Jorge Domínguez (P.J.).El Radicalismo triunfa con el 40% (De la Rúa), el FREPASO ocupa el segundo lugar con 27% (La Porta), el Justicialismo el tercero: 19% (Domínguez) y Nueva Dirigencia (Beliz), obtiene el 13%.

Pocas semanas después, el 26 de julio de 1996, Menem desplaza a Cavallo del ministerio de Economía. La prensa informa que si bien las estadísticas prueban el control de la inflación, el ministro no ha logrado bajar el desempleo ni disminuir el déficit fiscal. Luego de proponerle el cargo, sin éxito, a Roberto Alemann y a Miguel Angel Broda -dos economistas liberales ligados a los grandes consorcios- el presidente designa a Roque Fernández, economista del CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina, de posición ortodoxamente liberal) quien ha sido funcionario del FMI y consultor del Banco Mundial. Inmediatamente, el FMI da apoyo a las medidas de ajuste que promueve el nuevo ministro.

La ratificación del modelo liberal provoca la reacción de los gremios. El 8 de agosto se produce un paro general, uno de los más fuertes que sufre el gobierno . La CGT realiza un nuevo paro por 48 horas, los días 26 y 27 de setiembre, también con un porcentaje muy alto de adhesión, y reitera luego la medida de fuerza –el 26 de diciembre- centrada, en esta oportunidad, en la crítica a las medidas de flexibilización laboral impulsadas desde el Poder Ejecutivo. Asimismo, también los sectores medios arrecian contra la política económica del gobierno: es “el apagón” del 12 de setiembre de 1996, impulsado por la oposición, en especial el Frepaso y la UCR. Muchos barrios se oscurecen esa noche y en algunas esquinas y plazas se escuchan golpeteos de cacerolas evidenciando el disgusto hacia la política oficial.

En esos meses, la prensa informa que existen alrededor de 3 millones de personas que viven debajo de la línea de pobreza en el Gran Buenos Aires, lo cual alcanza al 26,7% del conurbano. Cuando concluye 1996, los analistas

³¹ Diario Página12, 16/12/1992



políticos coinciden en que el gobierno menemista pierde consenso aceleradamente.

El nuevo año se inicia con una noticia que conmociona a la sociedad argentina: el 25 de enero de 1997, en Pinamar, ha sido asesinado y luego, calcinado, el periodista José Luis Cabezas, fotógrafo de la revista “Noticias”. La causa residiría en que ha tomado fotografías del empresario postal Alfredo Yabrán, quien se oculta de la prensa para facilitar sus negocios, estimándose que podría ser un crimen por encargo. Yabrán se encuentra por entonces en abierto enfrentamiento con Cavallo, quien últimamente lo ha calificado de “mafioso”. Otras versiones sostienen que el crimen se integra al creciente antagonismo entre Menem y Duhalde, y se habría producido para responsabilizar al gobernador bonaerense en cuya jurisdicción se produjeron los hechos.

En esos primeros meses de 1997, se acentúa el malestar social en Plaza Huincul y Cutralcó produciéndose nuevas manifestaciones y cortes de ruta, tanto por los desocupados en reclamo de trabajo, como por parte de los maestros que sostienen reclamos salariales. El 12 de abril se producen enfrentamientos. La gendarmería reprime con violencia, provocando la muerte de Teresa Rodríguez, una empleada doméstica, de 25 años, que se dirigía a su trabajo. En ese mismo mes -el día 2- los docentes han instalado la llamada Carpa Blanca frente al Congreso Nacional, en Buenos Aires, iniciando un ayuno en defensa de la escuela pública y un fondo de financiamiento educativo.

A mediados de 1997, cuando ya se empieza a discutir acerca de las elecciones presidenciales para el período 1999-2003, el escenario político muestra al FREPASO en pleno crecimiento, con posibilidades de disputarle el poder al Justicialismo. Pero, por tratarse de una fuerza nueva, que aun no ha logrado estructurarse en todo el país, sus dirigentes más moderados estiman conveniente componer un frente electoral con el radicalismo. Las tratativas culminan a principios de agosto, echándose las bases de la “Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación” y decidiéndose que la fórmula presidencial se elija mediante internas abiertas.

El 14 de agosto se lleva a cabo un nuevo paro general de los sectores sindicales disidentes “contra el modelo y la flexibilización”. La CGT oficial queda al margen e incluso la “Alianza” otorga un apoyo tímido y ambiguo, pero sin embargo el arco sindical opositor, que va desde “el perro Santillán” hasta el ahora sumado Lorenzo Miguel, y que incluye además a grupos de desocupados, alcanza peso propio, con importante adhesión en algunas provincias.

La situación social se torna cada vez más preocupante en todo el país. El desempleo aparece como expresión directa del “modelo económico”. En La Plata, por ejemplo, llega al 17,7% y en un supermercado donde ofrecían 800 vacantes, se formaron colas de más de 10.000 personas durante dos días.



Situaciones como ésta han llevado a Lorenzo Miguel a tomar distancia de los gremialistas menemistas y acompañar a los opositores. Así, la Unión Obrera Metalúrgica denuncia “la desviación ideológica del gobierno”, afirmando que “se insiste en medidas antiperonistas que propician una reforma laboral que desquicia derechos y conquistas de los trabajadores”³².

Dos meses después, el 26 de octubre, se realizan elecciones legislativas en todo el país, produciéndose un triunfo importante de la oposición : la Alianza alcanza, a nivel nacional, el 46% de los votos y el P. Justicialista, sólo el 36% . En Capital Federal, el resultado es contundente: Alianza 57%, P. Justicialista 18%, Cavallismo 17%. En la provincia de Buenos Aires, Fernández Meijide derrota a Hilda “Chiche” Duhalde por 3.275.000 votos contra 2.800.000. En el Gran Buenos Aires se nota especialmente la pérdida de caudal electoral por parte del justicialismo, siendo que se trata de uno de sus bastiones tradicionales. El oficialismo, sin embargo, logra triunfar en Santa Cruz, San Luis, Formosa, La Rioja, Salta, Jujuy, La Pampa y Santiago del Estero, mientras la oposición obtiene la victoria en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Chubut, Chaco y Neuquén. En los distritos de Capital Federal se observa un fenómeno nuevo: “Acción por la República”, de Domingo Cavallo, supera en votos al menemismo en Recoleta, Belgrano, Nuñez y Colegiales.

Hacia la derrota

El año 1998 muestra debilitado al menemismo. Aún cuando algunos hombres del entorno de Menem, propician modificar nuevamente la Constitución para hacer posible la “re-reelección” del Presidente, la propuesta no encuentra aceptación en la mayoría de la dirigencia partidaria. Así, Duhalde emerge como el único candidato posible del justicialismo.

En esos meses, los periódicos aparecen sobrecargados de información relacionada con actos de corrupción y nuevos escándalos. Ya en los primeros meses del año, se ha concitado el interés de la población cuando se dictó sentencia en el caso del asesinato de la joven María Soledad Morales, ocurrido en Catamarca, entre el 8 y 10 de setiembre de 1990, en el cual se hallan implicados altos funcionarios del gobierno y de la clase pudiente de la provincia. Poco antes, las denuncias de Zulema Yoma, daban sustento a la tesis de que su hijo Carlos fue asesinado por gente que tiroteó al helicóptero en que viajaba, hasta provocar su caída, probablemente como castigo al presidente por algún acuerdo incumplido.

Otra de las cuestiones graves que se ventila por entonces es la operación ilegal de venta de armas, por parte de la Argentina, a Ecuador y a Croacia, violando

³² UOM, agosto 1997



disposiciones públicas. En el caso de Ecuador, Argentina es garante de paz del Protocolo de Río de 1942 y de manera alguna podría vender armas a ese país, por entonces en guerra con Perú. Con respecto a Croacia, este país sufría un embargo militar de la ONU que impedía esa contratación. Obturadas las vías legales, desde el poder se urdió la maniobra ilegal: un decreto autorizó a Fabricaciones Militares para vender armas a Venezuela y Panamá, para, luego de sacarlas del país, cambiarles el destino hacia Ecuador y Croacia. La operación compromete al Presidente de la Nación y otros altos funcionarios del Estado. Estas ventas se realizaron entre 1991 y 1995 y ahora el escándalo cubre las páginas de los diarios. Además, la investigación de este ilícito aparece ligada a la muerte de varias personas: Andreoli y Aguilar, militares testigos en la causa, que murieron, junto a otras 9 personas, en un ‘accidente’ de helicóptero. Asimismo, este hecho se vincula a la explosión de la fábrica militar de Río Tercero (3/11/95) que habría sido intencional para impedir el inventario de armas y en relación a este episodio, mueren también dos técnicos de la empresa. También aparece asesinado de un balazo, Horacio Estrada, intermediario en la operación. Y luego, encuentran muerto, aparentemente de un infarto, a Carlos Alonso, subadministrador de la Aduana quien también debía declarar en el juicio. Este suceso lleva al recuerdo del presunto suicidio del brigadier Rodolfo Etchegoyen, el 13 de diciembre de 1990, quien había sido titular de la Aduana cuando se designó, en Ezeiza, como contralor, a Ibrahim Al Ibrahim, con cuñado del presidente Menem y protagonista, con su mujer Amira Yoma, del “Yomagate”, sobre tráfico de narcodólares. Etchegoyen investigaba asimismo lo relacionado con la empresa Ecdadassa perteneciente a Alfredo Yabrán. Este último, aparece también muerto el 20 de mayo de 1998 en Entre Ríos, en uno de sus campos, siendo catalogado el hecho como suicidio, que se habría producido al acorralarlo la Justicia como responsable intelectual del asesinato del fotógrafo Cabezas. Asimismo, el 4 de octubre de 1998, aparece ahorcado en una zona marginal de Ciudad Universitaria, Marcelo Cattáneo, a quien se sindicaba como encargado de repartir la coima derivada del negocio de informatización del Banco Nación contratado con IBM. Otra cuestión que se ventila en esos días es el contrabando de oro, así como las connivencias del grupo Yoma con operaciones de tráfico de armas y transferencias financieras ilegítimas.

La atmósfera resulta irrespirable desde el punto de vista ético, a tal punto que Graciela Fernández Meijide, del FREPASO, incurre en una desafortunada declaración: “Los peronistas son más delincuentes que nosotros”. Y el presidente Menem le responde: “Los delincuentes son los integrantes de la Alianza y lo ha confesado la propia dirigente; nosotros, no”. En la opinión pública, algunas figuras del menemismo, como José Luis Manzano y Carlos Grosso, aparecen como la expresión del asalto a las arcas del Estado. Algunos incluyen en esa condición al propio presidente Menem cuya fortuna personal asciende, por entonces, según la valuación que él mismo da a sus bienes, a \$ 2.574.893.



A lo largo de ese año, E. Duhalde, ya consagrado como candidato para las próximas elecciones, intenta tomar distancia del modelo económico menemista. Los analistas políticos advierten un curioso fenómeno: mientras Duhalde, candidato del Justicialismo en las próximas elecciones, gira su posición alejándose de Menem e insinúa la necesidad de regresar a planteos económicos antiliberales -estrechando relaciones con algunos sindicalistas- en cambio, la Alianza, que debería consolidar una posición alternativa, muestra a sus dirigentes, en especial De La Rúa y Alvarez, en actitud prudentísima temiendo cuestionar la convertibilidad y cuidándose de no adoptar posiciones que puedan tacharse de populistas. Asimismo, Graciela Fernández Meijide insiste en centrar la lucha por otorgar mayor seguridad -en tanto los delitos en Buenos Aires, durante el primer gobierno de Menem, se duplicaron de 61.000 a 127.000- y en concluir con la corrupción, pero no ataca al modelo, que es la razón última de las calamidades sociales mencionadas. En setiembre, se hace público que la Alianza ha recibido apoyo económico para la campaña electoral por parte de los grupos Techint y Soldatti, como asimismo del multimillonario Soros. Luego, se sabrá que los grandes consorcios financian, al mismo tiempo, a los dos grandes partidos. Duhalde, por su parte, si bien ha declarado terminantemente que “el modelo” está agotado, mantiene tratativas con Cavallo, para asegurarse votos desde la derecha.

El 30 de noviembre de 1998, la Alianza define candidaturas a través de internas: De la Rúa vence holgadamente (63%) a Graciela Fernández Meijide (36,5%) en la disputa para ser cabeza de la fórmula presidencial. Poco después, “Chacho” Alvarez es designado candidato a vice, para completar la fórmula con De La Rúa, mientras Fernández Meijide queda como candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

En esa época, la política económica implementada continúa dando los mismos resultados: concentración de riqueza, por un lado y agravamiento, de la miseria, por otro. Si en 1990, el 21% de la sociedad argentina estaba por debajo de la línea de pobreza y el 3% en la indigencia, ahora los indicadores son 26,7% y 6,7% respectivamente. La brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre, que alcanzaba a 8 veces en 1974 y había subido a 16 veces en 1990, alcanza ahora a 24. El resultado de la balanza de pagos en esos años da importantes y sucesivos déficits:

1997	-12.286 millones de dólares
1998	-14.554 millones de dólares
1999	-11.945 millones de dólares

Consecuentemente, la Deuda Externa alcanza valores fabulosos: en 1999, el Estado Nacional debe 121.877 millones de dólares, las provincias y



municipalidades: 22.000 millones y el endeudamiento privado se estima entre 40.000 y 56.000 millones, lo que hace un total cercano a los 200.000 millones de dólares.

Durante 1999, las elecciones provinciales dan resultados favorables al P. J. en Córdoba, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán y Tierra del Fuego, mientras la oposición logra la victoria en Catamarca, San Juan y Río Negro.

Durante los meses previos a las elecciones presidenciales, los candidatos en pugna ratifican sus estrategias. De la Rúa insiste en la necesidad de ‘honrar’ la deuda externa, respetar la convertibilidad y mantener las privatizaciones, al tiempo que centra su prédica en la condena de todos los corruptos y el necesario adcentamiento de la gestión pública. Por su parte, también el Duhaldismo evidencia falta de propuestas que impliquen una transformación profunda, ya fuese en lo económico, lo político o lo social. Frente a la opinión de varios economistas nacionales que aconsejan salir gradualmente de la convertibilidad del “uno a uno”, antes de que el modelo estalle, la dirigencia política –peronista y aliancista- prefiere adecuarse al temor de amplios sectores sociales ante cualquier cambio y supone que puede seguir administrando el modelo.

Los dos candidatos presidenciales y sus economistas se preocupan por asegurar a funcionarios del FMI que no llevarán a cabo ninguna transformación importante, aunque Duhalde, en los últimos tiempos, manifiesta críticas al neoliberalismo y propone reactivar el consumo. Un factor que juega negativamente para el justicialismo es el alto grado de corrupción que ha caracterizado en los últimos tiempos al gobierno, a tal punto que los sectores medios centran la cuestión en “desalojar a la mafia del poder”, como si la inmoralidad proviniese de ‘los hombres’ y no del sistema.

El 24 de octubre de 1999, el pueblo en las urnas pone fin a la experiencia menemista. La fórmula de la Alianza (Fernando de la Rúa - Chacho Alvarez) obtiene 9.031.087 votos, que rondan el 48,5% mientras el Partido Justicialista alcanza a 7.902.798 votos, es decir, el 38%. El tercer lugar lo ocupa Acción por la República (Cavallo), con 1.880.646 votos, (el 10%). En la provincia de Buenos Aires, sin embargo, el Justicialismo logra triunfar llevando como candidato a Carlos Ruckauf quien obtiene el 48% de los votos, derrotando a Graciela Fernández Meijide, de la Alianza, con 41,5%.

La década menemista ha llegado a su fin. Deja varios saldos: una reducida parte de la sociedad argentina se considera en el Primer Mundo porque utiliza teléfono celular, viaja al exterior o navega en Internet, mientras catorce millones de argentinos viven por debajo de la línea de pobreza y más de tres millones, en la indigencia. El endeudamiento externo ha aumentado notablemente. La desocupación y el trabajo en negro han proliferado como consecuencia de la destrucción del aparato productivo, causado por la libre importación, liquidando, en los hechos, la legislación laboral protectora. La política exterior argentina ha



caído en el más grave satelismo respecto a Estados Unidos: “relaciones carnales”, como las denomina Guido Di Tella. El sistema educativo y sanitario se halla gravemente deteriorado, mientras el sistema previsional público ha sido destruido. Apartado de toda función de control, el aparato del Estado se encuentra quebrado.

Presidencia de Fernando de la Rúa (1999-2001)

La administración del “modelo o el fracaso de la Alianza”

El 10 de diciembre de 1999, asumen Fernando De La Rúa como presidente y Carlos “Chacho” Alvarez como vice-presidente., integrándose el gabinete de las siguiente manera:

Jefe de Gabinete:	Rodolfo Terragno
Economía:	José Luis Machinea
Relaciones Exteriores:	Adalberto Rodríguez Giavarini
Interior:	Federico Storani
Educación:	Juan José Llach
Defensa:	Ricardo López Murphy
Trabajo y Seguridad Social:	Alberto Flamarique
Salud Pública:	Héctor Lombardo
Justicia:	Ricardo Gil Lavedra
Obras y Servicios Públicos:	Nicolás Gallo
Acción Social:	Graciela Fernández Meijide

Ni la trayectoria política del Presidente, ni la ostensible declinación del radicalismo producida en los últimos tiempos, permiten confiar en que dé la ansiada solución a los graves problemas pendientes. Sin embargo, la mayoría de los argentinos recibe con alivio el traslado del mando, como si un mero cambio de hombres pudiese dejar atrás los rasgos irritantes del período menemista: alto grado de corrupción, deuda externa abultada, sumisión a Estados Unidos, desocupación, manejo desaprensivo y farandulesco del poder. Los argentinos saben lo que no quieren, pero carecen de un programa político



y económico alternativo. Este quizás pudiese haber surgido desde el Frente Grande, agrupación política nueva y de perfiles “progresistas”, pero esa posibilidad se frustró y la dirección del FREPASO ha preferido asegurar el triunfo a través de la “Alianza”, quedando a la zaga del radicalismo, en vez de profundizar sus planteos y jugarse a transformaciones de fondo.

En los primeros meses de esta gestión se hace evidente que no hay vocación transformadora, ni espacio para la osadía, ni propuesta nueva. El gobierno se limita a administrar el “modelo” recibido en herencia, repitiendo inclusive los errores, limitaciones y contradicciones de su antecesor.

En materia de derechos humanos, pocos días después de la asunción del nuevo presidente, la policía de Corrientes reprime un corte de ruta provocando dos muertos. A mediados de abril, de nuevo se sofoca brutalmente una protesta sindical frente a plaza Congreso. Días después, el 3 de mayo, un corte de ruta en Salta, reprimido por las fuerzas de seguridad, concluye con otra víctima. El campo popular reacciona, días mas tarde, con un paro nacional convocado por las centrales sindicales.

A su vez, la política económica no cuestiona el “modelo”, sino que sólo aspira a “administrarlo”, para lo cual acuerda con el FMI. Este, por su parte, condiciona su apoyo financiero a que se instrumente la flexibilización laboral. Cumpliendo esta exigencia, el 26 de abril del 2000, el Congreso Nacional aprueba la ley de Reforma laboral dirigida a obtener una superexplotación de la mano de obra.

Pero, inmediatamente circula el rumor de que se han pagado coimas a los legisladores para obtener la mayoría necesaria para sancionar la ley. El gremialista Hugo Moyano denuncia que el ministro de Trabajo -Alberto Flamarique- ha dicho, frente a las dificultades para lograr los votos de algunos parlamentarios, que “eso se arregla con la Banelco”. A su vez, el 15 de agosto, el vicepresidente “Chacho” Alvarez da estado público a un anónimo en que se denuncia la compra de votos a los senadores. Circulan versiones de que el dinero del soborno habría provenido de la SIDE, resultando responsabilidad de Fernando de Santibañez, jefe de esa repartición e íntimo amigo del presidente De La Rúa.

Poco después, en setiembre, un periódico reproduce declaraciones de un senador que se refiere al “soborno en el Senado”: “Hay plata de las petroleras para aprobar la ley de hidrocarburos...El sistema está pervertido...Todo el mundo viene y te pone la mosca”³³. De modo que, aún en el plano ético -caballito de batalla de la Alianza contra la corrupción menemista- el nuevo gobierno queda emparentado con el anterior. Poco después, el 6 de octubre del 2000, cuando el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, involucrado en las coimas, es designado a cargo de la Secretaría General de la Presidencia, el

³³ Testimonio de Silvia Sapag, quien se lo habría escuchado al senador Emilio Cantarero, Diario Clarín, 20/9/2000



vicepresidente Chacho Alvarez renuncia porque considera que esa actitud indica el desinterés del Presidente para luchar contra la corrupción.

Para esa época, ya ha asumido Javier Tizado como Secretario de Industria. Se trata de un hombre del grupo Techint (ya anteriormente, el grupo ha aportado a Eduardo Casullo, para desempeñarse como titular de la Aduana). De esta manera, De La Rúa transita un camino similar al de su antecesor en la presidencia, para que los hombres de los grandes grupos económicos controlen resortes importantes del poder.

Por entonces, el drenaje de divisas ocasionado por el pago de los servicios de la deuda externa es muy alto pues la banca mundial aplica sobretasas sobre los nuevos créditos, de hasta el 7,5%, en razón del puntaje de “riesgo país” que las consultoras internacionales aplican a la Argentina. El ministro de Economía José Luis Machinea -ya alto funcionario durante el gobierno de Alfonsín y denunciado por Alejandro Olmos como uno de los responsables del crecimiento de la deuda externa- insiste en la necesidad de bajar gastos fiscales pues “de otro modo, en dos meses dejamos de pagar la deuda”³⁴. Con tal propósito ha recurrido a aumentar los impuestos y a reducir sueldos en la administración pública. De nuevo, pues, política de ajuste que recae sobre los sectores populares.

Estas medidas terminan por diluir la escasa simpatía con que cuenta Machinea en la opinión pública y su situación se torna inestable. Poco tiempo después, renuncia al cargo.

En marzo del 2001, asume como ministro de economía Ricardo López Murphy, hasta ese momento a cargo del ministerio de Defensa. Se acentúa así el carácter derechista del gobierno pues se trata de un “liberal duro” con antecedentes demasiado prestigiosos en el mundo financiero internacional: ha sido consultor del F.M.I. y del Banco Mundial, figura clave de FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas) y en 1994, ha sido distinguido como uno de los 200 líderes internacionales por el Foro Económico Mundial³⁵.

De inmediato, López Murphy promueve un nuevo ajuste, pero de mayor magnitud que los anteriores, centrado especialmente en fuertes recortes en el presupuesto educativo. Su propuesta provoca irritación entre maestros, profesores y estudiantes que se movilizan y genera asimismo disconformidad entre varios dirigentes del FREPASO que ocupan cargos importantes en el gobierno. El proyecto significa aplicar un neoliberalismo económico que desnuda la claudicación total del gobierno ante los grandes poderes económicos internos y externos, a tal punto que varios dirigentes radicales y frepasistas deciden desvincularse del gobierno. De La Rúa vacila, tal cual es su

³⁴ Machinea, José Luis, Diario Clarín, 16/11/2000

³⁵ Diario Clarín, 20/11/1999



costumbre, pero pocos días después, comprende la imposibilidad de aplicar esa política y López Murphy debe renunciar.

Desde meses atrás, los grupos empresarios más concentrados proponen como ministro de Economía a Domingo F. Cavallo. Inclusive Chacho Alvarez, poco tiempo antes, ha sugerido su nombre. De La Rúa procede entonces a su designación, aunque buena parte de la dirigencia “aliancista” evidencia su disconformidad. Esta designación viene a ratificar que la Alianza resulta el continuismo del menemismo, no sólo en las medidas adoptadas, sino también en los hombres que la implementan. Asimismo, ratifica, una vez más, quiénes son los dueños del poder real, tanto en la Argentina de Menem como en la Argentina de De La Rúa.

Sin embargo, algunos sectores argumentan que Cavallo resulta más tolerable que López Murphy en la medida en que maneja un nuevo discurso pues se opone a la dolarización -propugnada, en esa época, por Menem y por el presidente del Banco Central, Pedro Pou- e insiste en que es necesario salir de la recesión. Asimismo, plantearía la necesidad de “flexibilizar” la convertibilidad, a través de la inclusión del euro, para que el valor del peso resulte un promedio de los valores del euro y el dólar.

Pero, en julio de 2001, Cavallo anuncia el nuevo ajuste, que significa, entre otras cosas, rebaja en los sueldos de la administración pública y en haberes jubilatorios, en la misma línea regresiva de distribución del ingreso que se ha venido aplicando en perjuicio de los trabajadores.

Poco después, ante las dificultades para enfrentar el pago de los bonos de deuda externa, Cavallo arma “el megacanje”, de acuerdo con su amigo David Mulford, consistente en un reemplazo de títulos viejos por otros nuevos, con mayor interés y plazo, que da cierta tranquilidad a los inversores. Cabe destacar que este operativo financiero deja en manos de los Bancos y financistas intervinientes la bonita suma de 150 millones de dólares, hecho que luego dará lugar a un juicio. Al mismo tiempo, se dicta la ley de “déficit cero” estableciendo que el Estado no puede gastar más que las sumas que recauda. El ministro sostiene, asimismo, que hay que acentuar la austeridad como única forma de hacer frente a la difícil situación por la que atraviesa el país.

El 8 de agosto del 2001 se produce una importante movilización de piqueteros y organizaciones de izquierda, con apoyo de CTA, que marchan desde Congreso a Plaza de Mayo, en repudio a los sucesivos ajustes que implementa el gobierno. Ya por entonces, una honda decepción apresa a amplios sectores medios, pues el “delarruismo” se ha mimetizado con el menemismo. Algunos humoristas afirman que también el nuevo gobierno ha copiado el estilo farandulesco de Menem, sólo que el Presidente es demasiado aburrido y ese papel lo juega uno de sus hijos, vinculado al mundo del espectáculo, a través de un romance con una cantante de moda.



Ante la nueva frustración, crece la desconfianza de los sectores populares en la vieja dirigencia política radical-peronista, como asimismo en la nueva “frepasista” que también ha claudicado prematuramente. Este escepticismo se manifiesta ya en desinterés ante las próximas elecciones, juzgándolas como una burla dada la irrepresentatividad de los políticos.

Así, el 14 de octubre, cuando se realizan elecciones legislativas, los resultados son insólitos y pasan a la historia como “las elecciones del voto bronca”: el oficialismo, desciende de los 8.745.267 de votos obtenidos en 1999 a 3.3340.245, es decir, pierde, en dos años, más de cinco millones de votos, lo cual denota claramente la decepción causada al electorado. La oposición justicialista triunfa ampliamente, con 5.727.986 votos (40%, con relación al 23% del oficialismo), pero también pierde votos (más de 1.100.000) pues, dos años atrás, había alcanzado 6.847.573 votos. Las cifras expresan de manera rotunda la irrepresentatividad de la dirigencia política de los partidos mayoritarios. Si en 1999, el desprestigio del menemismo había llevado a volcar votos a favor de la Alianza, ahora, 2001, el fracaso de la Alianza conduce a aumentar los votos en blancos y nulos (23%, al que se denominó voto bronca) y las abstenciones (25%).

Significativamente, este repudio a la dirigencia no significa, sin embargo, alejarse de las urnas, pues un mes más tarde -del 14 al 17 de noviembre- el FRENAPO (Frente contra la Pobreza) organizado desde el CTA, realiza una consulta sobre una propuesta de seguro de empleo y formación de \$ 380 y obtiene, en una votación voluntaria, 3 millones de votos. Esto debió ser advertido por los políticos repudiados dos meses atrás como una severa advertencia popular, que podía expresarse en las calles en cualquier momento. Pero no supieron comprenderlo.

En esta difícil situación política, se desenvuelve la crisis financiera. A la fuga de divisas operada en los últimos meses, se agregan ahora los retiros de depósitos que amenazan con llevar a la quiebra al sistema bancario. El 1^o de diciembre, Cavallo decide limitar a 250 pesos semanales las extracciones de efectivo de los bancos, provocando la iracundia de los titulares de cuentas bancarias quienes se lanzan a las calles reclamando sus ahorros, con golpeteo de cacerolas. Asimismo, el ministro establece un severo control para el giro de divisas al exterior, pero la medida resulta demasiado tardía.

Las reservas, que estaban en 26 mil millones de dólares en enero del 2001, son apenas 14 mil millones a fines de noviembre. Para esa misma fecha, los depósitos bancarios, que en enero eran de 84 mil millones de pesos, están en 67 mil millones. A su vez, “el riesgo país” ha venido creciendo de manera alarmante: 2.360 puntos para el 8 de noviembre, 2.679 para el 16 de noviembre, 3077 para el día 21 y 4.149 puntos, a fin del mes. El INDEC informa que los datos de octubre dan un desempleo del 18,3% y un subempleo del 16%. No sorprende, pues, el nuevo paro general dirigido contra la política económica del gobierno y contra la retención de dinero en los Bancos, decidido por los



gremios para el 13 de diciembre, que se cumple con altísimo porcentaje de inasistencia.

El gobierno se encuentra en situación harto difícil pues debe pagar 2 mil millones de dólares por vencimientos de deuda externa . El 6 de diciembre, el FMI informa que no girará los 1.260 millones prometidos porque no se han cumplido las metas acordadas. “La economía argentina -afirma un economista- está en la cuenta regresiva. La depresión se agiganta, el descalabro financiero se profundiza, el desequilibrio fiscal avanza, el desempleo se eleva...”³⁶. Cavallo visita a los directivos del FMI y a su regreso, circulan versiones acerca de un nuevo ajuste. El gobierno argentino debería reducir sus gastos en 4 mil millones de dólares, mediante la eliminación del Fondo docente, la suspensión temporaria del aguinaldo, la disminución de los presupuestos de ANSES y PAMI y una fuerte reducción de los presupuestos provinciales. La simple difusión de este trascendido acrecienta el malestar popular.

El 14 de diciembre se producen saqueos en supermercados de Mendoza y Concordia, mientras se vive una situación muy tensa en Rosario, donde se han intentado tomas de negocios expendedores de alimentos.. El 15 y el 16 surgen grupos en distintos barrios de Buenos Aires, munidos de cacerolas, que tanto reclaman por los depósitos incautados como por la incapacidad y corrupción del gobierno. El lunes 17 se producen nuevos saqueos, que se reiteran el martes en diversos lugares del conurbano y en distintas ciudades del interior. Familias desesperadas ingresan a los supermercados para tomar por sí lo que les niega un sistema organizado para hambrearlas.

Son diversos los rumores que corren: mientras algunos periodistas imputan los saqueos a la “mano negra” de punteros del conurbano, que responden a Ruckauff, otros sostienen que se trata de grupos de piqueteros alentados por militantes subversivos, mientras los más sensatos explican que desde hace meses se vienen agravando las condiciones económico-sociales que provocan reacciones de este tipo.

En el anochecer del 19 de diciembre, el Presidente -que se ha caracterizado por su veneración por las instituciones- dirige al pueblo un discurso anodino, donde anuncia que ha decretado el estado de sitio. Esa alocución juega como un detonante provocando una reacción espontánea de aquellos sectores medios que habían confiado en su discurso democratista. El golpeteo de las cacerolas enhebra una red de indignación y protesta que confluye hacia la Plaza de Mayo. Aquellos que se habían ilusionado en 1999, concluyen en el 2001 manifestando contra quienes habían traicionado aquella ilusión. El cántico de la multitud es contundente:

Que se vayan todos, que se vayan todos

³⁶ Muchnik, Daniel, Diario Clarín, 16/12/2001



que no quede
ni uno solo

Cavallo renuncia horas después. Corren versiones de que el Congreso le iniciaría juicio político al Presidente de la Nación. Las manifestaciones de repulsa al gobierno continúan el día 20, aunque con mayor agresividad y presencia preponderante de jóvenes activistas, no ya de familias, como había ocurrido el 19. Por la tarde, De La Rúa se dirige al pueblo explicando que busca el consenso con el Partido Justicialista para consolidar su gobierno. En tanto, las fuerzas de seguridad reprimen violentamente en Plaza de Mayo y sus alrededores, a pesar de la intervención de una jueza que exige frenar la represión. Las Madres de Plaza de Mayo se hacen presentes en el lugar y varias de ellas son golpeadas por la policía.

Alrededor de las 19hs del día 20, el Presidente De La Rúa envía su renuncia al Senado. Poco antes de las 20 horas, un helicóptero despegó desde el techo de la Casa Rosada llevándose al presidente renunciante. Alrededor de treinta muertos en todo el país es el saldo trágico del estallido popular que ha tumbado a un gobierno.

Se inicia ahora un nuevo ciclo histórico. En la noche del pasado se hundieron precipitadamente los discursos glorificadores del neoliberalismo económico y la idealización de las instituciones, así como el prestigio de viejos partidos tradicionales y de sus dirigentes. El pueblo argentino ha manifestado contundentemente “lo que no quiere”. Aún las consignas limitadas a impugnar “el corralito” -por parte de algunos manifestantes- llevan implícitas el cuestionamiento a un sistema económico de naturaleza financiera y dependiente bajo la égida del Fondo Monetario Internacional.

A partir de aquí, amplios sectores del pueblo argentino inician la dura experiencia de buscar un proyecto alternativo, así como organizaciones políticas distintas, auténticamente representativas -las asambleas populares serán una de esas expresiones -capaces de abrir el camino hacia un país distinto.



CONTRATAPA

“Ustedes han hecho de la vida un paisaje de muerte. Dejad de robar a los pobres y devolved con creces las riquezas de vuestras usuras, anulando la deuda externa y promoviendo un nuevo orden económico fundado en una auténtica globalización de la justicia y la solidaridad”

Obispo Joaquín Olmedo

	<p>Cuadernos para la Otra Historia © Centro Cultural “Enrique S. Discépolo” Av. La Plata 2193 C1250AAL Ciudad de Buenos Aires República Argentina Tel/fax: (++54-11) 4923-2994 e-mail: web@discepolo.org.ar Internet www.discepolo.org.ar</p>
--	---

